

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

BOLETINES N^{os}. 13.204-07 y 13.205-07, refundidos.

[Objetivo del Proyecto](#) / [Constancias](#) / [Normas de Quórum Especial](#) / [Consulta Excma. Corte Suprema](#) / [Asistencia](#) / [Antecedentes](#) / [Aspectos Centrales del Debate](#) / [Discusión en General](#) / [Votación idea de legislar](#) / [Texto del Proyecto y Proposición de la Comisión](#) / [Acordado](#) / [Resumen Ejecutivo](#) / [Índice](#)

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar, en general, acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en dos Mociones, ahora refundidas: la primera (signada Boletín N^o 13.204-07), de los ex Diputados señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda, y señores Ascencio, Desbordes, Schilling y Walker, y los Honorables Diputados señores Barrera, Celis y Soto Ferrada; la segunda (signada Boletín N^o 13.205-07), de los ex Diputados señoras Castillo y Núñez, y señores Cruz-Coke, Díaz, Fuenzalida, Schilling, Silber, Vidal y Walker, y el Honorable Diputado señor Soto Ferrada. Para su despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de “simple”.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 20 de julio de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Los artículos 42; 47, inciso quinto; 49, N^{os}. 1 y 10 (en lo que se refiere a los artículos 415 ter y 415 octies); 50, N^{os}. 1 y 2; 51, N^{os}. 22 y 29; 61 y 62, son de rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, inciso primero, y 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, por lo que para su aprobación requieren del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

La Cámara de Diputados, mediante los oficios N^{os}. 15.309 y 15.310, ambos de 21 de enero de 2020, solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto del proyecto de ley, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y el artículo 16 de la ley N^o 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El Máximo Tribunal emitió su opinión mediante [Oficio N° 69-2020, de fecha 2 de abril de 2020](#), oportunidad en la que informó sobre el Boletín N° 13.204-07, y mediante [Oficio N° 124-2020, de fecha 26 de junio de 2020](#), cuando informó sobre el Boletín N° 13.205-07.

Posteriormente, la Excelentísima Corte Suprema remitió, además, [Oficio N° 153-2021, de 23 de agosto de 2021](#), en el que se refirió a ambos boletines, conjuntamente.

- - -

ASISTENCIA

Participaron en las sesiones presenciales y telemáticas que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, los siguientes personeros:

- La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, acompañada por la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton, y los asesores jurídicos señoras Natalia Arévalo y Flora Ben-Azul y señor Diego Moreno.

- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolett, en compañía del Subdirector Jurídico, señor Marcelo Freyhoffer, y el Jefe del Departamento de Defensa Judicial Penal, señor Gonzalo Mardones.

- El Fiscal Nacional Económico, señor Ricardo Riesco, acompañado por el Jefe y el Subjefe de la División Anti-Carteles, señores Juan Correa y Eugenio Ruiz-Tagle, respectivamente.

- El Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Mauricio Larraín, en compañía del Fiscal de la Unidad de Investigación, señor Andrés Montes, y del Director General de Regulación de Conducta de Mercado, señor Patricio Valenzuela.

- El Director (S) de la Unidad de Análisis Financiero, señor Marcelo Contreras.

- El Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., señor José Manuel Mena, acompañado por el Gerente General, señor Luis Opazo; el Fiscal, señor Juan Esteban Laval, y el abogado señor Juan Ignacio Piña.

- El asesor jurídico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Guillermo Briceño.

- El Director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Felipe Irarrázabal.

- El académico de la Universidad de Chile, señor Gonzalo Medina.

- Los académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, señores Antonio Bascuñán y Javier Wilenmann.

- Los profesores de la Universidad Diego Portales, señores Héctor Hernández y Fernando Londoño.

- El abogado señor José Pedro Silva.

- La analista de la Fundación Jaime Guzmán, señora María Teresa Urrutia.

- Los asesores parlamentarios señora Alejandra Fischer y Ximena Gutiérrez y señores Roberto Godoy, Felipe Hübner, Pedro Lezaeta, Héctor Mery, Roberto Munita y Francisco Rodríguez.

- Los periodistas señoras Daniela Farías y Javiera Riquelme y señor Mauro Burgos.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

Tal como se consignó precedentemente, esta iniciativa tiene su origen en dos Mociones, cuyos principales fundamentos, en síntesis, son los que siguen:

- La [primera Moción](#), corresponde al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica (Boletín N° 13.204-07), de autoría de los ex Diputados señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda, y señores Ascencio, Desbordes, Schilling y Walker, y los Honorables Diputados señores Barrera, Celis y Soto Ferrada.

- La [segunda Moción](#), corresponde al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (Boletín N° 13.205-07), de autoría de los ex Diputados señoras Castillo y Núñez, y señores Cruz-Coke, Díaz, Fuenzalida, Schilling, Silber, Vidal y Walker, y el Honorable Diputado señor Soto Ferrada.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La iniciativa que ha conocido la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, consta de sesenta y cinco artículos (divididos en cinco títulos). Su contenido principal se resume como sigue:

- Título I, contiene disposiciones sobre delitos económicos y establece cuatro categorías. Asimismo, establece normas sobre la doble consideración de circunstancias que califiquen el hecho como delito económico; sobre la inaplicabilidad de sus normas a empresas que tengan el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416; y, sobre el concurso de delitos.

- Título II, comprende reglas sobre las penas y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de los delitos económicos. También, establece ciertas reglas generales, normas sobre la determinación de las penas privativas de libertad y de la pena de multa; sobre penas sustitutivas de los delitos económicos y sobre la determinación de las inhabilitaciones aplicables a todo condenado por un delito económico.

- Título III, trata sobre el comiso de ganancias y distingue dos supuestos de aplicación. En primer lugar, aquellos casos en que existe condena previa y, por otro lado, establece determinados supuestos en que procede su aplicación sin condena previa, habiéndose dictado sentencia absolutoria o que declara el sobreseimiento.

- Título IV, dispone modificaciones a los siguientes cuerpos legales: Código Penal; Código Procesal Penal; Código Orgánico de Tribunales; ley N° 20.393; ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas; ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; ley N° 18.045, de Mercado de Valores; Decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones; ley N° 20.712, que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales; ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de

las instituciones de seguridad social; ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores; ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; ley N° 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude; decreto ley N° 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia; Código Tributario; decreto con fuerza de ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

- Título Final, contiene reglas sobre la aplicación temporal del proyecto; sobre la prohibición de fraccionamiento de las normas que fueren pertinentes para determinar si la aplicación de la ley resulta más favorable; sobre la determinación del tiempo de ejecución del hecho, que se entenderá perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

- Consenso en la necesidad de ampliar el catálogo de delitos económicos en Chile.

- Adecuación del proyecto de ley a las modificaciones introducidas recientemente por la [ley N° 21.314](#), que establece nuevas exigencias y responsabilidades de los agentes de mercados, y cambios en los delitos económicos.

- Regulación de la titularidad de la acción penal por el delito de colusión.

- Efecto eximente de responsabilidad para la persona jurídica por la debida implementación de un modelo de prevención de delitos, adecuadamente diseñado, implementado y controlado.

- Vacancia legal para la implementación del proyecto, de tal manera de que las personas jurídicas dispongan de un plazo para realizar las adecuaciones requeridas para cumplir con el deber de gestión de riesgos que este proyecto de ley les impone.

- Relación entre el Servicio de Impuesto Internos y Ministerio Público en la persecución de delitos tributarios.

- Incorporación de los delitos medio ambientales como delito base de lavado de activos.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL¹

Al iniciar la discusión en general de esta iniciativa, hizo uso de la palabra el **profesor señor José Pedro Silva**, en su calidad de secretario ejecutivo de la comisión de académicos que elaboró el proyecto de ley, para precisar que la comisión estuvo compuesta por los profesores señores Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, Fernando Londoño, Gonzalo Medina y Javier Willenmann y las profesoras señoras Magdalena Ossandón, Verónica Rosenblut y María Soledad Krause.

A continuación, el **profesor señor Javier Willenmann** expuso acerca del contenido del proyecto, el cual establece distintas categorías de delitos económicos, con la finalidad de explicar los cambios que intentan generar y las condiciones bajo las cuales se aplicarán esos cambios, porque se aparejan ciertas consecuencias que no se verifican con otras clases de delitos.

De esta forma, indicó que el proyecto distingue dentro de los delitos económicos cuatro categorías, a partir del artículo 1° y siguientes, a saber:

1.- Delitos económicos absolutos, que se dan con completa independencia de las condiciones en las que se cometen.

2.- Delitos patrimoniales, que son aquellos que se cometen al interior o en beneficio de una empresa. Esta última circunstancia es la que hace aplicable las reglas de los delitos económicos, pero solo respecto de empresas medianas o grandes, no de pequeñas o micro empresas.

¹ [Sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de fecha 1 de diciembre de 2021.](#)

[Sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de fecha 15 de diciembre de 2021.](#)

[Sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de fecha 10 de mayo de 2022.](#)

[Sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de fecha 18 de mayo de 2022.](#)

3.- Delitos funcionarios, es decir, no son cometidos dentro de la empresa, pero sí conectados con delitos cometidos desde o en beneficio de una empresa, por ejemplo, en casos de corrupción.

4.- Delitos auxiliares a otras clases, cuando se cometen en conexión a otro delito, como el lavado de activos.

Si se aprueba este proyecto de ley, añadió, se seguirán las siguientes consecuencias:

- Cambiarán las reglas de determinación de la pena.

- Cambiarán las penas de multa, porque en vez de existir un sistema de graduación absoluto de la pena, se calcularán en relación a los ingresos anuales de una persona.

- Se aplicarán cambios en la regulación de la responsabilidad de las personas jurídica.

- Existirá una figura ampliada de comiso, abarcando todas las ganancias obtenidas en virtud del delito.

Las modificaciones más generales dicen relación con el régimen personal de las penas, porque el régimen actual supone un doble ejercicio: en primer lugar, se analiza qué delito se cometió; a continuación, se valoran las circunstancias atenuantes y agravantes aplicables para adecuar la gravedad y la forma en que se cometió el delito. Posteriormente, se determina una sanción y eventualmente se aplica una pena sustitutiva, es decir, no privativa de libertad. Si bien en el Código Penal todas las penas se gradúan con penas de cárcel, por aplicación de la [ley N° 18.216](#) los delitos con penas inferiores a cinco años, tratándose de personas no reincidentes, se castigan con penas sustitutivas. El problema de este sistema, adujo, aplicado a los delitos económicos, radica en que se producen consecuencias absurdas. Parte importante del sistema opera cuando se detecta la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, que están pensadas para delitos comunes y que resultan inaplicables a estos ilícitos. En la práctica sólo se aplica la irreprochable conducta anterior y, en ciertos casos, la colaboración del imputado. Para los delitos económicos, las penas aparejadas generalmente serán menores a cinco años y en la mayoría de los casos las personas tienen irreprochable conducta anterior, lo que explica que usualmente se impongan penas no privativas de libertad. Esta situación es percibida en la población como impunidad.

En este contexto, acotó, el proyecto busca adecuar las penas con la finalidad de que sea un sistema adecuado y justo en consideración al tipo de delito de que se trata. Por este motivo, el nuevo

sistema de penas contiene un esquema de agravantes y atenuantes en que lo central es, por un lado, la posición en la organización del que comete el delito (siendo más grave en aquellos casos en que se ocupa una posición jerárquica alta), y, por otro, la dimensión del perjuicio (generalmente al graduar un delito económico se atiende al número de personas afectadas y el monto). A partir de la graduación de estos dos aspectos, se modifica el sistema de las penas sustitutivas. Así, se propone generar un sistema que distinga cuatro grados de gravedad: en primer lugar, remisión condicional, consistente en un simple control en que el autor debe firmar; luego, reclusión parcial en el domicilio; en tercer lugar, reclusión parcial en establecimiento público, y, finalmente, penas de cárcel efectiva en aquellos casos de especial gravedad.

En lo tocante al sistema relativo a la pena de multa, el académico sostuvo que la normativa vigente normalmente funciona como un modelo absoluto. Así, ante la comisión de un delito puede aplicarse una multa de 4 a 40 UTM o 40 a 400 UTM. Sin embargo, en los delitos económicos esto tiene problemas, ya que normalmente son grandes empresas y las multas establecidas resultan irrisorias, incluso aunque sea una de 4.000 UTM. Por tal razón, la iniciativa no gradúa la pena absolutamente, sino que conforme a un criterio de días-multas. Por ejemplo, si cien días-multas corresponden al ingreso promedio que tendría una persona en un año normal en el período por el cual es condenado, entonces para una empresa de un gran patrimonio puede ser una elevada cantidad de dinero.

El **profesor señor Gonzalo Medina**, refiriéndose a las modificaciones a la [ley N° 20.393](#) (sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas), destacó que no distingue a qué tipo de empresa se aplica ni a su tamaño. En este sentido, el cambio más relevante es la ampliación del catálogo de delitos que son susceptibles de cometerse por personas jurídicas. La iniciativa amplifica de tal manera su número que todos los delitos económicos generarán responsabilidad penal para las personas jurídicas, tipificándose cerca de ciento diez delitos de esta naturaleza. De esta manera, la regla general será que las empresas sí respondan por los delitos en que estén involucradas. Además, se amplía el número de personas jurídicas responsables penalmente, toda vez que se aplica también a empresas del Estado, y no parece razonable que personas jurídicas de derecho público no sean responsables (como las entidades religiosas, universidades o partidos políticos).

Por otra parte, prosiguió, se contemplan cambios en los modelos de imputación, es decir, en los presupuestos bajo los cuales se atribuye a una persona jurídica responsabilidad por hechos cometidos por una persona natural. El nexo que se establece entre ambos es más laxo que el vigente (por ejemplo, pueden ser terceros que prestan servicios a las empresas). Asimismo, hay nuevas reglas relativas a las maniobras que

puedan adoptar las empresas para evitar el cumplimiento de la condena, como la transferencia de bienes (circunstancia que actualmente no se regula). Además, se modifican los presupuestos del modelo de prevención de delitos contemplado en el artículo 4°. La idea es cambiar la visión en la prevención de delitos en las empresas, que hoy es muy formalista, para adoptar un modelo más material, enfocado en los procesos de la empresa y orientados a su tamaño, giro y actividad. Respecto a las penas aparejadas, se incorpora la figura de un supervisor, que deberá informar al juez sobre el cumplimiento de la empresa de un modelo de prevención o el mejoramiento del existente, cuando exista un riesgo de reincidencia. También se incluyen nuevas reglas para el comiso, en armonía con la modificación general de esta figura.

El profesor señor Antonio Bascuñán, en lo que atañe al comiso de ganancias y a las modificaciones relativas a la tipificación de delitos y al establecimiento de sus penas, explicó que actualmente hay dos cuerpos normativos que lo contemplan, a saber: la [ley N° 20.000](#), sobre tráfico de estupefacientes, y la [ley N° 19.913](#), sobre lavado de activos. En el Código Penal la situación es incierta, porque depende de la interpretación del concepto de “efectos del delito” (conforme al artículo 41). Algunos han postulado que los efectos incluyen a las ganancias.

Si bien el comiso es una pena, precisó el académico, el proyecto propone entenderlo como una consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria. Por tanto, sigue el estatuto de una consecuencia civil de derecho público, equivalente al estatuto de indemnización de perjuicios (que es una consecuencia civil de derecho privado). Desde este punto de vista, y siguiendo las reglas del enriquecimiento injusto, el proyecto también prevé que el comiso de las utilidades sea aplicado a aquellos que se hayan enriquecido a título gratuito o de mala fe, aunque no hayan participado en la comisión del delito; por ejemplo, los herederos, y las personas jurídicas que hubieran recibido en aportes las ganancias provenientes del delito. Se propone, además, regular una institución denominada comiso sin condena, que se aplicaría en aquellos casos en que, si bien se ha constatado la comisión de un hecho típico y antijurídico, no se dicta condena en casos de rebeldía, de inimputabilidad o de sobreseimiento, porque el imputado no es penalmente responsable por razones ajenas al hecho ilícito, o bien, porque la responsabilidad penal se extinguió (por ejemplo, por muerte del imputado). El proyecto también propone realizar una audiencia de comiso sin condena previa, que es una nueva institución similar a un juicio abreviado. Algunas de sus reglas son aplicables en aquellos casos en que el comiso se verificó con condena previa, o cuando el Ministerio Público proponga el comiso a personas que no han participado en la ejecución del delito, o el monto del comiso es superior a 400 UTM. En estos casos, se citará a una audiencia especial, distinta a la de determinación de pena.

Las modificaciones a los delitos y a las penas, se encuentran en el Título IV del proyecto, y se refieren al Código Penal y a diversas leyes especiales. Las más relevantes son las que siguen:

- En lo que concierne al Código Penal, se contemplan enmiendas para resolver problemas detectados luego de las reformas a la [ley N° 20.720](#), sobre delitos concursales, y a [ley N° 21.121](#), sobre negociación incompatible. También se propone corregir la estructura del delito de estafa, mediante la modificación de la ya centenaria normativa, y la adopción de la estructura que la doctrina y la jurisprudencia han entendido que implícitamente tiene este delito. Igualmente, se introducen nuevos delitos, como la violación de secreto, el aprovechamiento no consentido de los secretos del cliente, la explotación de relaciones laborales y delitos medioambientales (a cuyo respecto existe un proyecto de ley específico). Sobre este último punto, destacó que el daño ambiental se entiende como la causación de un resultado de daño que tiene efectos catastróficos, en función de la contaminación que genera. El proyecto específico sobre delitos ambientales considera que la contaminación es la emisión ilegal de sustancias contaminantes (este asunto debe entregarse a la regulación administrativa y no a la ley penal). El delito de contaminación queda enmarcado por el caso grave de elusión o de infracción reiterada de la normativa ambiental. La idea es que el delito de contaminación se someta a una regla penal que refuerce el sistema de control sancionatorio administrativo ambiental, para evitar que el diseño conceptual del delito se solape con el sistema administrativo y se genere confusión entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal.

- Dentro de las reformas a las leyes especiales, la principal es la modificación a la Ley de Mercados de Valores, que exigirá a la Comisión coordinar esta propuesta con las reformas de la [ley N° 21.314](#), recientemente aprobada. En términos generales, sintetizó el académico, las propuestas de reforma son una racionalización sistemática de los delitos contra el mercado de valores, y configuran una nueva regulación del delito de abuso de información privilegiada. Sobre la manipulación del mercado de valores, el proyecto distingue entre la infracción administrativa y el delito que se tipifica con independencia de ella. El uso de información privilegiada, acotó, es un ilícito que se estructura en base a una responsabilidad diferenciada según quién comete el delito. Así, los *insiders* de los emisores e intermediarios tienen un tratamiento más riguroso que los *outsiders*. Además, se introduce la tipificación de la recomendación de la transacción que se basó en el uso de la información.

- El proyecto contiene un conjunto de reglas que se refieren al monopolio de la acción penal por parte de entidades fiscalizadoras administrativas, como la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Estas son

reglas acordadas por la Cámara de Diputados, para privar a dichos entes del control completo que actualmente tienen en estos delitos.

- Finalmente, se contemplan reglas relativas a la aplicación temporal de las leyes derogadas, que han sido redactadas de manera de evitar los problemas que suelen darse en la práctica.

Consultado por el **Honorable Senador señor Galilea** respecto de los aspectos del proyecto de ley más controvertidos entre los penalistas expertos, y por el **Honorable Senador Araya** sobre, por una parte, si se tuvo en cuenta el proyecto de ley relativo a delitos medio ambientales para identificar las principales diferencias entre ambas regulaciones y, por otra, si el proyecto modifica las facultades actuales de la CMF en la persecución penal y si afecta la titularidad de la acción penal de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos, el **profesor señor Bascuñán** explicó que deben distinguirse los diferentes temas que regula la iniciativa, así:

- En lo que atañe a la modificación de las normas reguladoras de las agencias fiscalizadoras con potestad administrativa sancionadora, comentó que, en circunstancias que el proyecto en su versión original no contemplaba reglas sobre el ejercicio de la acción penal, el texto aprobado por la Cámara de Diputados incluyó reglas sobre la potestad de entes fiscalizadores como el Servicio Nacional de Aduanas, la Fiscalía Nacional Económica y el Servicio de Impuestos Internos. Además, apuntó, la idea es generar una herramienta que otorgue al Ministerio Público mayor incidencia en el ejercicio de la acción persecutoria (lo que actualmente se encuentra entregado a la discrecionalidad de esas agencias). No obstante, en ninguno de los casos regulados se afectan las facultades vigentes de la CMF, porque no hay un régimen de control del ejercicio de la acción penal, como a propósito de estos otros entes fiscalizadores. Lo que sí se observa, añadió, es una propuesta de regulación de los delitos contemplados en la Ley para el Mercado de Valores, que en la práctica tampoco genera consecuencias en la actividad administrativa sancionadora de la CMF, ya que la gran innovación se vincula con la tipificación de los delitos de manipulación de mercados, manteniéndose las normas sobre infracciones que generan sanciones administrativas.

- En lo tocante a los delitos medioambientales, señaló que el proyecto de ley no se refiere a todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente. Así, por ejemplo, no alude al almacenamiento ni al tratamiento de residuos peligrosos, o al manejo de energía nuclear, ni a la caza, pesca y contrabando de especies en peligro de extinción (ello, porque se centra en la tipificación de delitos de contaminación y de daño ambiental).

- Específicamente, en cuanto el delito de daños ambientales, prosiguió, hay diferencias destacadas entre esta iniciativa legal

y el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, principalmente en el tratamiento de los delitos de contaminación, pues aquí se configura como un delito de peligro de daño catastrófico. El proyecto paralelo, además, propone reformar otros cuerpos legales completamente distintos, incluso regula asuntos orgánicos y de procedimiento (por ende, no sólo tipifica delitos). De esta manera, ambos proyectos coinciden en ciertas áreas y se alejan en otras (en cuestiones que no son significativas), por lo que perfectamente pueden tramitarse en forma paralela.

Enseguida, el académico, si bien previno acerca de la dificultad para establecer los puntos controvertidos del proyecto, explicó que se han formulado discrepancias por quienes podrían ser imputados por estos delitos. Entre ellas, mencionó las que siguen:

Se han planteado dudas sobre si el régimen de responsabilidad penal para personas individuales satisface las consideraciones de igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. A su juicio, esa desconfianza estaría suficientemente satisfecha por las reglas que contiene el proyecto, sin perjuicio de que, en la práctica, en nuestra legislación ya existen estatutos especiales de responsabilidad (por ejemplo, en la [ley N° 20.609](#), llamada Ley Zamudio).

Refiriéndose al comiso de ganancias, el académico sostuvo que algunos han cuestionado si procede o no otorgar competencia civil a los tribunales penales. Con todo, dijo, desde siempre los tribunales han tenido facultades para resolver sobre la indemnización de perjuicios y, por tanto, para conocer sobre asuntos civiles. Respecto del comiso aplicado a terceros que se enriquecieron pero que no intervinieron en el delito, se ha esgrimido que podría no satisfacer las garantías del debido proceso, ya que a su respecto no hubo acusación ni condena. Sobre el particular, el docente fue de parecer que se trata de una cuestión civil porque se está ante un enriquecimiento sin causa o de aprovechamiento de dolo ajeno (habría que examinar si se ofrecen suficientes garantías bajo una óptica civil).

La aprensión más relevante que se ha planteado por parte de expertos en *compliance*, responde a la necesidad de establecer un plazo de vacancia legal, esto es, de vigencia diferida de la ley desde su publicación, para que las empresas puedan adecuarse a las nuevas exigencias.

El Honorable Senador señor Galilea precisó que también existen aprensiones sobre la eliminación de facultades de la FNE en el ejercicio de la acción penal para otorgárselas al Ministerio Público. Esta situación, arguyó, puede generar consecuencias en materia de delación compensada, que ha sido una herramienta importante para desbaratar carteles. Si hay diversos titulares de la acción penal la figura perderá fuerza,

porque la persona involucrada no tendrá claridad si a través de la delación obtendrá una eximente. De allí es que fuera partidario de aclarar este punto.

El **Profesor señor Bascuñán** explicó que dicha regla no estaba en el proyecto original, dado que los penalistas que contribuyeron a su redacción advirtieron las dificultades que generaría. Resulta paradójico, añadió, que exista una distinción tan tajante entre las consecuencias administrativas para una persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona natural. En este sentido, adujo, en el entendido de que se trata de un régimen que busca establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos económicos, se estaría ante una lógica distinta a la del proyecto en general. No sería sensato perseverar en la secuencialidad como regulación: hay un problema estructural que debe resolverse. La secuencialidad, puntualizó, es una figura introducida por el decreto ley N° 211: para ejercer la acción penal por colusión es indispensable una sentencia del Tribunal de la Libre Competencia o de la Corte Suprema que resuelva la reclamación y declare la existencia del ilícito administrativo. La mayor complejidad se da porque esta regla podría generar procesos judiciales paralelos al proceso administrativo sancionatorio y originar un problema probatorio al retardarse el inicio de la investigación penal.

Ante una inquietud del **Honorable Senador señor Huenchumilla** acerca de si los delitos económicos quedan comprendidos dentro de la categoría general de los delitos de fraude o de aquellos cometidos contra de la fe pública, así como de los modelos de prevención de delitos económicos al interior de las empresas, el **profesor señor Medina** indicó que hay un catálogo de delitos económicos que tienen esta naturaleza en todo contexto, porque *per se* no pueden entenderse de otra forma. Existen otros tipos penales a los cuales el proyecto aplica el estatuto especial de delitos económicos bajo ciertos presupuestos, porque se cometieron en el contexto de una organización empresarial. Por ejemplo, la tala ilegal de bosques no será un delito económico si un individuo lo comete, pero si lo ejecuta una empresa en el ejercicio de una actividad económica sí serán aplicables las consecuencias previstas por esta iniciativa. Aunque en derecho comparado hay diversos intentos de sistematización de los delitos económicos, acotó, este proyecto sólo pretende consagrar un estatuto generalmente aplicable a la actividad económica.

En cuanto a la existencia de sistemas de prevención de delitos al interior de las compañías, el **Profesor señor Silva**, junto con recordar que la [ley N° 20.393](#) insta por tales mecanismos, explicó que el proyecto de ley flexibiliza los requisitos existentes para que las empresas tengan modelos efectivos y difundidos entre sus miembros (actualmente sólo se exigen estándares formales).

El **Profesor señor Londoño** manifestó que luego de dictarse la [ley N° 21.314](#), que modificó algunas normas relativas al mercado de valores, se introdujeron adecuaciones idiomáticas en este proyecto pero sin innovar en cuestiones de fondo. Por este motivo, sería todavía necesario ajustar algunas normas a los términos de la ley citada.

El **Honorable Senador señor Araya** manifestó su inquietud por los alcances de algunas modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados, y por la concordancia de este proyecto con el relativo al Nuevo Código Penal y con la normativa internacional en la materia (por ejemplo, la de la OCDE).

Sobre el nuevo Código Penal, el **profesor señor Wilenmann** consideró que, aunque ambos proyectos dialogan y tienen puntos de acuerdo, esta iniciativa goza de mayor especificidad, porque su función principal es establecer un estatuto especial para juzgar adecuadamente la criminalidad económica. Los proyectos de Código Penal, en cambio, si bien contemplan cambios en materia de penas y de determinación de la pena, mantiene el sistema general diseñado para delitos comunes, basado en una lógica de agravantes y atenuantes, sin considerar la naturaleza organizacional que tiene la delincuencia económica.

Sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, el **profesor señor Medina** sostuvo que este proyecto es coherente con el derecho comparado. En esa línea, agregó, países como Francia, Estados Unidos o Italia, han ampliado considerablemente el catálogo de delitos económicos.

El **Profesor señor Silva** hizo presente que, con posterioridad al primer trámite constitucional, un grupo de académicos ha trabajado en una propuesta de modificaciones destinadas a perfeccionar el articulado del proyecto.

Con motivo de su exposición, el **[señor Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero \(CMF\)](#)** manifestó que la institución a la que representa comparte plenamente la necesidad y pertinencia de legislar en las materias contempladas en este proyecto de ley, considerando que se fortalece la regulación jurídico penal vigente en Chile y se elevan los estándares actuales, en particular en lo referido al mercado financiero. La sanción penal, dijo, es un disuasivo muy importante para malas conductas en el mercado financiero. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que el proyecto de ley, en sus términos actuales, puede acarrear efectos indeseados en la persecución y sanción administrativa de los delitos que contempla, en circunstancias que la sanción administrativa es lo que compete a la CMF.

Refiriéndose a las inquietudes que suscita el

proyecto a la institución a su cargo, mencionó lo siguiente:

1. El proyecto de ley en discusión modifica la [ley N° 18.045](#), de mercado de valores, que establece estándares de conducta que se tipifican como delitos con consecuencia penal o como prohibiciones con consecuencias administrativas. En cuanto se lesione la fe pública la CMF siempre podrá imponer una sanción administrativa, como, por ejemplo, en el caso de una empresa que entregue información falsa al mercado, aun cuando no se haya hecho con el ánimo de engañar. La Ley de Mercado de Valores, en su artículo 59 y siguientes, regula las conductas más graves (que, por lo tanto, poseen consecuencia penal), y el artículo 58 dispone que cualquier infracción a la ley, incluyendo las contenidas en el artículo 59 y siguientes, pueden ser objeto de sanción administrativa por parte de la CMF. Al modificarse los delitos económicos, podrían quedar sin persecución administrativa conductas lesivas, lo que generaría inconvenientes pues esta clase de sanción juega un rol disuasivo importante para evitar malas conductas en el mercado financiero. El proyecto de ley, tal y como se encuentra redactado, puede llevar a la imposibilidad de sancionar la conducta asociada a la divulgación de información tendenciosa al mercado, al eliminarse el artículo 61 que sanciona a quienes entreguen información tendenciosa aún cuando no se persiga con ello ventajas o beneficios para sí o terceros. El proyecto elimina el delito de información tendenciosa al mercado sin recogerlo en otra norma.

Ilustró lo relatado con el caso de la Compañía Minera Schwager, del año 2004, cuando el señor Víctor Manuel Ojeda, en ese entonces director del Diario Estrategia, fue sancionado por la SVS (CMF es la continuadora legal de la SVS) por haber difundido información tendenciosa sobre dicha compañía en su diario, en beneficio propio. El precio de la acción iba a subir, y él tenía acciones en dicha compañía compradas con anticipación. Posteriormente el precio de la acción subió. La SVS estableció una sanción administrativa en este caso. Con el proyecto de ley propuesto no sería posible sancionarlo, lo que implica, en su opinión, un retroceso en materia de sanción administrativa. Por lo mismo, sugirió no eliminar el delito de divulgación de información tendenciosa al mercado.

2. El proyecto de ley, en su formulación actual, puede llevar a la imposibilidad de sancionar a quienes adopten o instruyan la remisión de antecedentes o información falsa. Esto se contempla en el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores.

El Fiscal de la Unidad de Investigación, señor Montes, precisó que lo regulado en el artículo 61 sobre información falsa o tendenciosa se reemplaza parcialmente en el proyecto con la figura del artículo 59 F. A su turno, el artículo 59 A se reemplaza parcialmente por el 59 A actual, por el artículo 59 F y el artículo 62 B. De esta manera, lo que se señala hoy por el artículo 59 A se regula desagregadamente en el nuevo

artículo 59 A, nuevo artículo 59 F y nuevo artículo 62 B.

El señor **Vicepresidente de la CMF** adujo que el proyecto en discusión introduce la expresión “el que actuando por cuenta de” en todos los delitos relacionados al envío de información falsa del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, alterando el autor de dicho delito desde el efectivo autor material hasta la persona que materialmente cumple con una instrucción por mandato, relación laboral o prestación de servicio (como una secretaria, por ejemplo), que no siempre está en conocimiento de que la información que se remite es falsa. Así, en el año 2012, en el llamado caso La Polar, se sancionó por la SVS a quienes generaron e instruyeron la remisión de información falsa al mercado, esto es, la alta gerencia de la compañía. Con la reforma que se propone, sólo se habría podido sancionar a quien materialmente envió la información. Esto también es un retroceso en la persecución administrativa de estas malas conductas.

El personero recomendó sustituir la alusión al que actuando por cuenta de otro entregue información falsa, por “el que proporcionare” o “el que instruyere proporcionar”, de modo que sean el directorio o la alta gerencia los responsables cuando se entregan antecedentes falsos al mercado.

3. En cuanto al riesgo de incluir como sujeto autor del delito de uso de información privilegiada a quienes no son *insiders* o no se encuentran dentro de la compañía y desconocen la certeza o efectividad de la información y su privilegio, el problema se produce con las personas que tienen la información privilegiada y no son parte de la entidad, pues podrían recibir la información sin saber que se trata de información privilegiada. La Ley de Mercado de Valores penaliza a la persona que tuvo acceso a la información privilegiada dentro de la compañía en razón de su cargo, posición o actividad al interior de ella. El proyecto elimina las exigencias relativas a la virtud por la cual se obtuvo el acceso a la información. La CMF considera que esto es un avance relevante, porque permite incluir, por ejemplo, a sujetos destinatarios de la norma, como un amigo o un familiar a quienes un analista interno les revele información. No obstante, habría un inconveniente: podría tratarse, por ejemplo, de un taxista que manejando su taxi escucha a ejecutivos principales de una compañía hablando sobre un caso específico de la empresa (el taxista desconoce la certeza y efectividad de dicha información y su privilegio). De allí que sugiriera ampliar el listado de sujetos autores del delito de uso de información privilegiada, sin extenderlo a personas que no son *insiders* y que desconocen la certeza o efectividad de dicha información.

4. Se requiere adecuar el proyecto de ley con las modificaciones introducidas recientemente por la [ley N° 21.314](#), que establece nuevas exigencias y responsabilidades de los agentes de mercados y cambios en los delitos económicos. Las penas del artículo 59 de

la Ley de Mercado de Valores, sobre entrega de información falsa, ya fueron aumentadas desde presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. Además, ya se incorporó a los socios de empresas de auditoría externa y a quienes presten servicios a dichas entidades como sujetos de las sanciones de los artículos 59 y 60.

5. Tratándose de las enmiendas a la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, habría inconsistencia entre el nuevo artículo 143 bis con la estructura y funcionamiento de las sociedades anónimas. El nuevo artículo busca penalizar al accionista mayoritario que impone acuerdos en la sociedad, para obtener beneficio en perjuicio de los accionistas minoritarios. La CMF está de acuerdo con prohibir los abusos por parte de los accionistas mayoritarios o controladores, pero ajustando el sujeto infractor a uno compatible con la estructura y funcionamiento de estas sociedades, porque la responsabilidad de administración directamente en el directorio y alta gerencia, no en los accionistas que los eligieron. El directorio y la alta gerencia deben actuar en favor del interés social de la empresa, y no de los accionistas. La legislación actual contempla herramientas para impedir que los accionistas mayoritarios expropien riquezas a los accionistas minoritarios (como en la oferta pública de adquisición de acciones, los procedimientos que ponen límite a las operaciones con partes relacionadas, la exigencia de director independiente en el directorio de la compañía, entre otras). Como solución, recomendó penalizar directamente a los directores, gerentes y altos ejecutivos de una sociedad anónima, no a los accionistas mayoritarios.

El Profesor de Derecho Penal, señor Bascuñán, puntualizó que no es función del derecho penal establecer normas de comportamiento para la adopción de sanciones administrativas. La función del derecho penal es establecer normas punitivas que recogen los ilícitos más graves contra el orden del mercado financiero. Si alguna modificación de un tipo penal propuesto por el proyecto incide en la falta de una norma de comportamiento que la CMF considera conveniente o razonable mantener, lo correcto es introducir una norma de comportamiento que prohíba dicho comportamiento que ha dejado de ser punible. En el caso señalado por la CMF, se debe pensar si dicho comportamiento se encuentra o no incluido en los artículos 52 o 53. Si no está incluido, habría que establecer un artículo 52 bis o 53 bis que recoja la preocupación de la CMF. No es correcto utilizar normas penales para sancionar administrativamente comportamientos que no son merecedores de pena, aunque sí de sanción administrativa. Esta es una cuestión elemental de proporcionalidad, que debe respetar también la CMF.

Respecto de la autoría en delitos de información falsa, arguyó que la situación es la inversa que lo considerado por la CMF: la sustitución de la persona natural desde “el que brinda información falsa” por “el que actúa por cuenta” radica la responsabilidad en quien actúa por otro,

es decir, quien representa a la persona jurídica (el obligado a entregar información verdadera es la persona jurídica). Si la obligación recae sobre la persona jurídica, el término propuesto por el proyecto es recalcar que quien actúa por la persona jurídica es responsable, y no la persona que materialmente comunique la información, como una secretaria o cualquier intermediario. Si esto no fuera suficientemente claro, se puede utilizar una terminología adecuada tanto para el derecho penal (explicitar el actuar en lugar de otro), como ocurre en la infracción de obligaciones que son propias de la persona jurídica, y para la CMF.

En lo que concierne al *insider trading*, sostuvo que, en su opinión, desde el punto de vista del derecho penal no habría necesidad de incluir una regla como la propuesta por la CMF: la situación que se describe es de ausencia de dolo, y siendo estos delitos de comisión dolosa, quien no conoce la relevancia de la información o su condición de información privilegiada, no sabe lo que hace desde el punto de vista de la responsabilidad penal y por tanto no merece pena. La pregunta en sede de responsabilidad administrativa es si se considera que aquello merezca sanción aunque no se sepa lo que se hace, al no estar en conocimiento que se trata de información privilegiada. Tratándose de la responsabilidad administrativa habría que utilizar un estándar de imprudencia, como es la que parece considerar la legislación europea (incluso para materias penales). Desde un punto de vista penal, y en ello hay consenso con la CMF, se trata de ampliar el círculo de destinatarios de los deberes desde los *insiders* hacia cualquiera que posea información privilegiada. Lo que sucede es que la responsabilidad penal requiere que el poseedor de información privilegiada sepa que la información es de tal naturaleza. De lo contrario, no sabe lo que hace. Y si no sabe lo que hace, no se le puede formular reproche por infracción dolosa de la norma.

Sobre concordancias con modificaciones legales recientes, recordó que en la tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados se previno que era indispensable tomar decisiones de adecuación de la redacción del proyecto a la luz de las enmiendas introducidas en la Ley de Mercado de Valores.

En lo tocante al artículo 134 bis, precisó que la regla no concentra responsabilidad en los accionistas, sino que en aquellos que tienen una posición mayoritaria en los órganos de decisión de la sociedad, sean las juntas de accionistas o los órganos de dirección. Por ende, también se cubre a los directores y no los deja fuera. Los que tienen una posición mayoritaria en los órganos de dirección se hacen responsables por los abusos de posición mayoritaria. Si hay acuerdos en los órganos de decisión en las juntas de accionistas que también son abusivos, quienes tienen posición mayoritaria en dichos órganos también responderán. Lo relevante es que responda todo aquel que tiene una posición mayoritaria de

poder, por la adopción de acuerdos abusivos respecto de la minoría.

El **Fiscal Nacional Económico**, luego de valorar positivamente el proyecto en general, sostuvo que originalmente no regulaba materias de libre competencia, en circunstancias que la libre competencia es solo una de sus aristas. En este ámbito, añadió, la FNE tiene inquietudes que surgen a partir de una indicación incorporada en la tramitación en la Cámara de Diputados, que propone modificar el régimen legal actual del decreto ley N° 211, y que podría constituir un misil a la línea de flotación de la política pública de persecución de carteles en Chile.

La FNE considera que el proyecto persigue solucionar necesidades importantes, e incluso urgentes, de la legislación de nuestro país, buscando dar cumplimiento a una anhelada aspiración de la ciudadanía en cuanto a lograr penalidad efectiva para la criminalidad económica y mayores grados de igualdad ante la ley en Chile. Además, se intenta ajustar el régimen de determinación y sustitución de las penas a las características propias de la criminalidad económica.

En ese marco, arguyó, si bien la FNE cree firmemente en el valor disuasivo de las sanciones penales para casos de colusión, para que la disuasión opere es esencial que quienes deciden coludirse enfrenten un riesgo cierto, real y efectivo, de sufrir penas privativas de libertad. No basta con establecer sanciones penales en la ley. Sobre el punto, recordó que el delito de colusión existió en Chile entre los años 1959 y 2003, y no sólo no hubo condenas sino que tampoco ninguna persecución penal. Para que exista disuasión, es imprescindible que las sanciones penales que consagra la ley, cualquiera sea la sanción penal, se apliquen y cumplan.

La FNE, prosiguió, comparte el diagnóstico que inspira al proyecto: con un sistema de terminación y sustitución de penas como el que tenemos hoy, ideado para la criminalidad común, el riesgo cierto, real y efectivo de aplicación de condenas criminales y la posibilidad de que exista efectivamente privación de libertad, queda en entredicho cuando se refiere a delitos económicos. Lo mismo ocurre respecto del delito de colusión, que se volvió a criminalizar en el año 2016.

A continuación, el señor Fiscal Nacional Económico aludió a los tres puntos que atañen a la legislación de libre competencia contenidos en el proyecto, a saber: la inclusión del delito de colusión en el catálogo de delitos económicos de primera categoría; el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de colusión; la obligación de la FNE de querellarse en casos de colusión que afecten bienes de primera necesidad, el establecimiento de un plazo de 90 días para querellarse desde la presentación del requerimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la aparente división de

competencias en la persecución de la colusión según el tipo de personas cuya responsabilidad se persigue (reservándose la sede administrativa para personas jurídicas y la sede penal para personas naturales).

La [ley N° 20.945](#), dijo, volvió a criminalizar la colusión. El Título V del decreto ley N° 211, llamado “De las Sanciones Penales”, consta de cuatro artículos: el 62, que tipifica el delito de colusión, establece las penas respectivas (que hoy van desde 3 años y un día hasta 10 años de cárcel) y regula su determinación judicial y ejecución; el 63, que regula la exención de responsabilidad penal o rebaja las penas a quienes se acojan al beneficio de la delación compensada; el 64, que regula las condiciones y modos de ejercicio de la acción penal respectiva; el 65, que establece el plazo de prescripción de la acción penal por el delito de colusión. De estos cuatro artículos, el proyecto en estudio sólo modifica el actual artículo 64 del DL N° 211.

Dicho artículo 64, acotó, establece primeramente la secuencialidad, es decir, que antes de iniciarse una persecución penal, debe existir una sentencia firme en sede de libre competencia, que incluye tanto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como a la Corte Suprema, declarando que existió una colusión. Además de la secuencialidad se establece la titularidad de la acción. La ley exige como condición de procesabilidad del delito de colusión, la interposición de una querrela por la FNE, lo que excluye la iniciativa de otros denunciantes, querellantes e incluso al Ministerio Público. La FNE está obligada a presentar querrela una vez agotada la sede de libre competencia, cuando se trate de casos que comprometan gravemente la libre competencia en los mercados. En los demás casos la querrela de la FNE es facultativa, por lo que ella decide si se querrela o no. En caso de que no se querelle, se debe justificar en una decisión fundada y de carácter público. La nueva propuesta del artículo 64 del DL N° 211, establece que la exclusividad de la acción penal sigue radicada en la FNE, pero ahora estaría obligada a querellarse en todos los casos que involucren bienes de primera necesidad, definidos en el mismo proyecto. La secuencialidad desaparece, y la FNE deberá querellarse dentro de los 90 días siguientes a que hubiese presentado su requerimiento, o hubiese iniciado su acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proyecto también establece una competencia diferenciada para conocer de la responsabilidad por colusión de las personas jurídicas, radicada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y de la responsabilidad por colusión respecto de las personas naturales, que quedaría radicado en sede penal. Asimismo, incorpora ciertas reglas para la introducción de pruebas obtenidas por la Fiscalía en el proceso penal.

En relación al origen de la nueva regulación de la acción penal que introduce el proyecto, destacó que aquella no formaba parte originalmente del texto. Es decir, el nuevo artículo 64 del DL N° 211 que consulta la iniciativa no es parte del resultado del trabajo del grupo

transversal de penalistas. No es parte de la iniciativa original que crea un estatuto diferenciado de derecho penal económico en Chile. La regulación de la acción penal que se busca introducir es fruto de una indicación presentada en la última sesión en que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados discutió el proyecto, sin mayor discusión, sin escuchar a ningún experto ni a ninguna institución relacionada.

El proyecto original no contemplaba cambios a la regulación de la acción penal de la colusión, donde los académicos que trabajaron en dicho proyecto establecieron que el proyecto no se pronunciaría sobre la titularidad de la acción penal por el delito de colusión. Ello debido a que se consideró que el proyecto no era el lugar adecuado para tratar esta materia orgánica de tanta relevancia. Así, en las páginas 5 y 6 de la carta de entrega del anteproyecto de ley de delitos económicos, de 13 de enero de 2020, se dijo “la discusión sobre la titularidad de la acción penal, es solo la punta del iceberg de varios problemas más profundos que aquejan al sistema, para los que el proyecto original no contenía ningún diagnóstico acabado ni proveía ninguna solución”. Cuando se introdujo esta indicación se consultó a los destacados promotores del proyecto, quienes sostuvieron que era inconveniente regular la materia en este contexto. Se señaló, entre otras cosas, que en el grupo no existía consenso sobre la manera de regular apropiadamente la titularidad de la acción penal por el delito de colusión, pero que sí existía consenso en que no podía entregarse la titularidad de la acción al Ministerio Público, sin que existiera previamente una reforma institucional de dicho órgano, lo que precisa de mayores recursos y sólo podía ser promovida desde el Ejecutivo. También se sostuvo que sería precipitado y temerario, sin un estudio acabado, promover un cambio en la acción penal de un órgano a otro.

Las consecuencias que tendría el nuevo artículo 64, que además adolecería de deficiencias de técnica legislativa, serían las siguientes:

a) La solución propuesta no se hace cargo de las principales dificultades que presenta cualquier esquema de persecución dual de la colusión, esto es, un sistema en que la colusión se persigue tanto en sede de la libre competencia como en sede penal.

En cuanto a las deficiencias de técnica legislativa, afirmó que la indicación relativa a la regulación del ejercicio de la acción penal por el delito de colusión no es coherente con la reforma que el propio proyecto propone para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proyecto original propone una ampliación del catálogo de delitos por los que respondería una persona jurídica, y en ese nuevo catálogo se encuentra el delito de colusión. Según el artículo 51, N° 1, del proyecto de ley, las personas jurídicas pasarían a responder penalmente por participar en un cartel. Sin embargo, la indicación relativa a la acción penal en materia de

colusión propone que el inciso cuarto del nuevo artículo 64 del DL N° 211 prescriba que la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en el acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales. De aprobarse la norma en comento, no hay claridad respecto a la disposición que regirá en definitiva la materia, esto es, si la que hace penalmente responsable de la colusión a las personas jurídicas o la que establece que se perseguirá a las personas jurídicas sólo en sede administrativa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y exclusivamente a las personas naturales en sede penal.

No se trata de discutir de la conveniencia de incluir la colusión en el catálogo de delitos por los que responda la persona jurídica, puntualizó, sino que el proyecto ofrece respuestas contradictorias ante dichas consultas (en una disposición establece que las personas jurídicas serán responsables penalmente por colusión, y en otras señala que la persecución penal se restringe únicamente a las personas naturales). Tal es el resultado de una indicación que no ha sido suficientemente analizada. Ello, sin considerar el problema desde una perspectiva más sustantiva, puesto que una división de competencias como la que plantea el proyecto debilita el régimen sancionatorio existente hoy para la colusión en Chile.

La FNE, dijo, no observa impedimento alguno para que las personas naturales que hayan intervenido en una colusión sean sujetos pasivos de una acción en sede de libre competencia ante el TDLC y en sede penal. En otras palabras, hoy las personas naturales que intervienen en una colusión pueden ser objeto de sanciones pecuniarias a título de multa, y además de penas privativas de libertad. De hecho, en los últimos requerimientos por colusión que como FNE se han presentado ante el TDLC se busca la aplicación de multas para los principales ejecutivos que participaron en la colusión. De allí que no se comprenda la modificación pretendida.

b) El segundo efecto de técnica legislativa del nuevo artículo 64 propuesto, dice relación con la delación compensada. Este es un mecanismo que permite eximir o reducir las sanciones a que se expone quienes se han coludido, si esa persona entrega antecedentes que conduzcan a acreditar la conducta y a determinar su responsabilidad. La delación compensada es el principal mecanismo para desincentivar, desestabilizar, detectar y perseguir carteles en el mundo entero, incluido Estados Unidos y Europa. En la legislación actual, si bien el beneficio de la delación compensada es otorgado por la FNE, la exención de responsabilidad penal del delator debe declararla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la sentencia que resuelve un caso de colusión. Así lo exige el artículo 63 del DL N° 211. Como en la legislación vigente la sentencia definitiva del tribunal es un requisito para el inicio del proceso

penal, un proceso penal sólo puede iniciarse una vez que exista una sentencia del TDLC que declare que el delator está exento de responsabilidad penal, y, por lo tanto, que no será objeto de persecución penal. El proyecto no elimina el artículo 63 actual del DL N° 211, por lo que se seguiría exigiendo una sentencia definitiva del tribunal para que el delator esté exento de responsabilidad penal. Pero, de aprobarse el proyecto tal y como está redactado, no habría sentencia definitiva del Tribunal cuando se inicie el proceso penal. Sería posible, incluso, que no hubiera una sentencia definitiva del Tribunal cuando concluya el proceso penal. Por tal razón, de aprobarse el proyecto en su redacción actual, un eventual delator enfrentaría un proceso penal sin estar exento de responsabilidad criminal. O de otra forma, el proyecto elimina la secuencialidad entre el proceso de libre competencia y el proceso penal, aunque sigue exigiendo que exista una sentencia de término en sede de libre competencia para garantizar que el delator esté exento de responsabilidad en sede criminal. Cabe preguntarse, entonces, quién usaría la delación compensada si una eventual exención de responsabilidad penal será posterior al inicio del proceso penal, o incluso, posterior a la sentencia que se dicte en juicio penal. El proyecto no soluciona este problema, empero, de no solucionarse, podría acabar con la delación compensada en Chile, herramienta que es la más efectiva en todo el mundo (y en nuestro país) para detectar, perseguir y sancionar la colusión.

En un solo artículo, agregó, el proyecto presenta numerosos otros ejemplos de deficiencias de técnica legislativa: los artículos 39 bis y artículo 63 del DL N° 211, que exigen a la FNE dirigir la acción contra los beneficiarios de la delación compensada, o al menos identificarlos en su requerimiento, para que el tribunal pueda declarar la exención de responsabilidad penal en su sentencia definitiva; el nuevo artículo 64 impediría a la FNE dirigir la acción administrativa contra personas naturales ante el tribunal. Cuestionó entonces cómo podría la FNE cumplir simultáneamente con el requisito de dirigir su acción, o al menos individualizar a las personas naturales deladoras ante el tribunal, si al mismo tiempo el nuevo cuerpo legal le impide dirigir la acción contra esas personas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque la responsabilidad de personas naturales debe perseguirse en sede penal. Además, el nuevo artículo 64 que introduce el proyecto obliga a la FNE a querellarse cuando el acuerdo colusorio hubiese recaído sobre bienes de primera necesidad, definidos detalladamente en su inciso tercero. Sobre esta definición, planteó las siguientes dudas:

- No se comprende la obligación de querrela cuando se trata de bienes de primera necesidad y no cuando se trata de servicios de primera necesidad.

- El proyecto en su artículo 16, N° 2, letra b), utiliza la expresión bienes de primera necesidad para establecer una agravante muy calificada en materia penal, sin definición de aquéllos. Lo anterior es sin

considerar que actualmente existe otro proyecto que forma parte de la agenda antiabusos del Gobierno anterior, que se encuentra en discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que aumenta las penas mínimas por colusión a 5 años de cárcel, en caso de afectación de bienes de primera necesidad. También, en esta instancia, se ha discutido la conveniencia de definir el concepto en la ley o si es preferible entregarlo a los jueces, entregando parámetros generales para su determinación. Existen en nuestra legislación múltiples conceptos distintos de lo que debe entenderse por un bien de primera necesidad. Según la definición de bienes de primera necesidad que hace el nuevo inciso tercero del artículo 64 del proyecto, la FNE, por ejemplo, estaría obligada a querellarse cuando el Sindicato de Pescadores de Pichilemu fije el precio de los mariscales y ceviches, pero no estaría obligada a querellarse cuando dos empresas trasnacionales fijan el precio del confort para todo el país. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó en el año 2014 al Sindicato de Trabajadores Independientes y Pescadores Artesanales de Pichilemu por acordar los precios que cada pescadería debía cobrar en la caleta. Estos bienes, de acuerdo al inciso tercero del artículo 64 propuesto en el proyecto, serían bienes de primera necesidad al ser alimentos. Pero no sería así el caso del papel confort, ya que no cabe en ninguna categoría listada por la norma propuesta.

- El inciso tercero del nuevo artículo 64 exige, para efectos del ejercicio de la acción penal por delito de colusión, que el acuerdo haya producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 (artículo que tipifica la colusión). El delito de colusión es un delito de peligro abstracto, y aquello es algo asentado en Chile a nivel legal, jurisprudencial y doctrinal, es decir, no exige para su configuración que existan efectos. La pregunta es si esta nueva norma, cuando se refiere a que la colusión haya producido efectos, pretende alterar los requisitos para configurar la colusión, haciéndolos más gravosos (pero esto dificulta la persecución y sanción de los carteles en Chile).

- El inciso cuarto del nuevo artículo 64 del DL N° 211, obliga a la Fiscalía a querellarse dentro del plazo de 90 días desde que se presenta su requerimiento. El problema radica en determinar qué ocurre en los casos en que sea un particular quien demanda por colusión y no sea la FNE. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya ha sancionado por colusión en casos iniciados por particulares, como es el caso de Pichilemu ya referido, y existe actualmente un juicio por colusión al mercado de transporte de peces iniciados por demanda de un particular.

Todos estos defectos, adujo, muestran que, al intentar regular la acción penal por colusión, se analizaron poco las implicancias. Este proyecto no sólo adolece de defectos de técnica legislativa. En la regulación del ejercicio de la acción penal el proyecto muestra graves problemas de fondo. Al diseñarse un sistema de persecución

dual de la colusión, esto es, uno en el cual convive la persecución de la libre competencia y la persecución penal, se plantean problemas que son de muy difícil solución. Como acredita la experiencia internacional, cualquier solución institucional que se entregue a un sistema de persecución dual requiere regular concienzudamente una serie de complejidades que el proyecto ni siquiera menciona. Así, en la experiencia comparada se han documentado problemas que suscita cualquier régimen de persecución dual de la colusión, sanción de libre competencia y sanción penal. Tales dificultades se refieren fundamentalmente al tratamiento de la delación compensada, al riesgo de decisiones contradictorias, a la protección de la información confidencial, a la determinación de casos que ameritan persecución penal, al rol que debe asignarse a cada institución para asegurar que el sistema sea eficaz, y finalmente, a los mecanismos a utilizar para asegurar la colaboración entre dos instituciones que forman parte de un sistema dual.

Si en sistemas de persecución dual se presentan dichos problemas, la cuestión es por qué existe entonces un sistema de esta naturaleza. La detección y persecución de carteles a nivel mundial es un fenómeno reciente. En el siglo XIX, e incluso en el XX, los carteles no sólo no eran sancionados, sino que incluso eran promovidos por el Estado. Si bien la primera legislación antimonopolio a nivel comparado es de 1890, no es sino hasta las últimas décadas que los carteles han sido detectados y sancionados con fuerza en todo el mundo. Considerando sólo los carteles internacionales, si en el año 1995 se había descubierto menos de 100 carteles a nivel mundial, en el año 2015 iban en casi 1.500. Si entre 1970 y 1979 las multas por carteles en Estados Unidos sumaron 48 millones de dólares, entre los años 2000 y 2009 alcanzaron los 4.200 millones de dólares. En Europa, si entre 1990 y 1999 se impusieron multas por 830 millones de euros, en la década siguiente esa cifra superó los 12.800 millones de euros. Este es un aumento de más de 1.500% en una sola década. Lo mismo ocurre en Chile: si entre 2000 y 2010 se sancionaron 7 casos de colusión con multas que en total sumaban menos de 10 millones de dólares, en la década siguiente la cantidad de casos sancionados aumentó en 300% y las sanciones alcanzaron más de 180 millones de dólares. Esto es un éxito explosivo en la detección, persecución y sanción de carteles que estuvo a cargo de agencias administrativas como es la FNE. Como resultado de dicho éxito, la colusión se ha ido criminalizando en algunas jurisdicciones en los últimos años. No obstante, se debe tener presente que la OCDE ha sostenido que existen penas de cárcel impuestas por pocas jurisdicciones y en pocos casos. Según los registros de la *Global Competition Review*, al año 2010 eran menos de 10 las agencias que habían logrado condenas de prisión a nivel mundial. Ejemplos sobran de jurisdicciones sofisticadas en que la persecución de carteles ha enfrentado dificultades serias, como es el caso de Australia (que criminalizó la colusión en el año 2009): existen 3 condenas criminales y ninguna de ellas contra personas naturales. En Canadá y Reino Unido, sólo 2 personas habrían cumplido penas efectivas de cárcel por colusión, mientras que nadie habría cumplido penas efectivas de cárcel en

Francia ni Irlanda. Es decir que, en cuanto al ejercicio de la acción penal por delito de colusión, la conclusión es extremadamente negativa. Por eso, es una materia que vale la pena volver a discutir.

Como genera dudas la inclusión de la colusión como delito económico de primera categoría, prosiguió, sería recomendable escuchar la opinión de los profesores que ayudaron en la elaboración del proyecto: el delito de colusión parte de la base que quienes lo han cometido son grandes empresas con ejecutivos que han intervenido en la conducta de manera activa, pero también existen casos medianos y pequeños de colusión (como es el caso ya reseñado de Pichilemu o de los boteros de Punta de Choros). En tales situaciones la FNE no debería estar obligada a presentar querrela.

Respecto de la inclusión del delito de colusión en el catálogo de delitos por los cuales responden las personas jurídicas, expresó que no se observa la ventaja de incluir este delito dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando la legislación actual de libre competencia (DL N°211) es igual o más exigente que dicha ley. Preocupa especialmente que, en el marco de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, las partes se pueden eximir de responsabilidad penal por el hecho de contar con un programa de *compliance*. La FNE promueve los programas de *compliance*: desde el año 2012 se cuenta con una guía que promueve la adopción de programas de esta índole, pero se entiende que aunque podrían ser considerados para una disminución de responsabilidad de las personas jurídicas, nunca podrían utilizarse como una causal de exención de responsabilidad por ilícito de colusión. Así lo declaró la Corte Suprema en un caso en que la empresa Walmart alegaba que tenía un programa de *compliance* de tal naturaleza que ameritaba su exención, y la Corte se lo negó fundada en que la delación compensada es la única causal de exención de responsabilidad en sede de libre competencia que contempla el ordenamiento. Un programa de *compliance* es bienvenido y podrá aminorar la multa, comentó, pero no eximir de responsabilidad a las personas jurídicas ya que las causales de exención de responsabilidad están en la ley.

El Director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez concordó en que el agregado de último minuto en temas de libre competencia en la Cámara de Diputados es una equivocada decisión porque genera efectos negativos. Además, plantearlo a través del concepto de bienes de primera necesidad es confuso. Por otra parte, la definición que se propone es débil, lo que se grafica al analizar el caso sobre control de precios en una caleta de pescadores, cuya sanción sería desproporcionada. Ya existe un mejor concepto a utilizar denominado “caso grave”, que contiene una guía con su significado, incluso comentada por el Ministerio Público y profesores. Se trata de un concepto que funciona en materia jurídico-penal.

Según dijera, la existencia de procesos paralelos (en sede de libre competencia y, ante una investigación criminal, de jueces de garantía) será siempre un beneficio para las empresas investigadas: los abogados intentarán tensionar los dos sistemas como estrategia de batalla. El punto central radica en que la colusión es compleja, y se tiene la impresión de que el Ministerio Público no entiende esta complejidad. Además, el sistema de libre competencia chileno es sofisticado, al poseer tribunales especiales y no ser una materia de sede administrativa. En algunos casos no es simple hacer la diferenciación entre competencia perfecta y colusión. Existen figuras novedosas (como los carteles de algoritmos y acuerdos de cooperación entre competidores) que son lícitas: hay la necesidad de probar el acuerdo (lo que es difícil ya que los acuerdos muchas veces constan en teléfonos de prepago u otros medios). Muchas veces este tipo de carteles se asemejan a carteles de droga, a sabiendas de que se está cometiendo una infracción. Se requiere por lo tanto experiencia para su investigación.

Enlazar dos sistemas que funcionan es también extremadamente difícil, porque responden a lógicas diferentes. Estados Unidos es el único país que posee cierto éxito en la persecución penal de la colusión, lo cual se debe, en su opinión, a que no se litiga en más del 90% de los casos y se llega a acuerdos (el jurado no comprenderá la colusión por su complejidad, y le dará la razón a la empresa o a las personas naturales que trabajaron en ella). De allí la necesidad de ser cuidadosos al momento de acoplar ambos sistemas. Al efecto, llamó a esperar un tiempo prudente para que la reforma del año 2016 comience a dar frutos.

Refiriéndose al Ministerio Público, sostuvo que se trata de un organismo nuevo que se observa sobrepasado ante la expectativa que genera. Su experiencia en materia de infracciones económicas es todavía muy incipiente. El derecho penal no es el remedio para todos los males: lograr una condena en derecho penal requiere pruebas contundentes frente a las garantías que posee una persona, y el estándar de más allá de toda duda razonable es muy difícil en esta área. Por eso, la colusión es difícil de pesquisar.

Al concluir, advirtió que, en su concepto, el proyecto de ley en materia de libre competencia mostraría deficiencias, y sugirió esperar a que el sistema actual de persecución madure. La FNE, acotó, es una institución seria y que hace un buen trabajo.

El Honorable Senador señor Walker explicó que la iniciativa consta de dos proyectos refundidos: uno, sobre aspectos de fondo de delitos económicos (que es el trabajado por los profesores que han acompañado durante toda la tramitación del proyecto); otro, que enfatiza la titularidad de la acción con el Servicio de Impuestos Internos y la FNE (con una indicación del Diputado señor Saffirio). En ese entendido, y

compartiendo el criterio de especialización que está en la génesis del proyecto, estuvo por separar los aspectos procesales de los de fondo.

El Honorable Senador señor De Urresti, junto con hacer presente el interés jurídico que tuvo la discusión legislativa referida a técnicas especiales de investigación relacionadas con la colusión, instó por la necesidad de comprender en toda su magnitud el fenómeno de la colusión y su impacto en el mercado: no bastan las estadísticas, apuntó. No parece razonable, añadió, que terminen privados de libertad los boteros de Punta de Choros y no los ejecutivos que se coludieron con el papel confort. Este desenlace, dijo, repugna al sentido común.

El Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., luego de destacar la importancia del proyecto de ley, previno acerca de las inquietudes que genera en el mundo bancario.

En tal sentido, el [abogado de la ABIF, señor Piña](#), precisó que los aspectos que suscitan mayor preocupación para la organización gremial que asesora se focalizan, principalmente, en tres áreas, a saber: a) modificaciones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas; b) figura delictiva vinculada a la publicidad engañosa de productos financieros; c) período de vacancia legal.

En lo tocante a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el profesional comentó que los asociados de la ABIF, si bien comparten el espíritu de la ley, coinciden en que resulta imprescindible hacer mejoras. Al respecto, dijo, se trata de un ámbito que aunque comenzó con un catálogo restringido, ha ido creciendo progresivamente y de modo asistemático (en esa línea, el proyecto de ley lo incrementa considerablemente). Hay observaciones críticas relativas a los criterios de imputación de responsabilidad penal, de prevención de delitos y de pena de supervisión. Sobre los criterios de imputación, señaló que se produce un giro interesante al precisarse que existe responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se comete alguno de los delitos del catálogo, por o con la intervención de una persona que ocupe un cargo, función o posición en ella, o que prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación. Aquí el cambio medular radica en que mientras en el modelo actual el eje de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (además de la infracción de sus deberes de dirección y supervisión) está dado por el beneficio o interés de la persona jurídica en el delito, en la propuesta que se analiza se prescinde del beneficio y se contempla una regla inversa: no sólo no es necesario el beneficio, sino que la única manera de excluir la responsabilidad es si el hecho se perpetra exclusivamente en contra de la persona jurídica (así, cuando es la víctima exclusiva del hecho, puede argumentar que no tuvo relación con la comisión de ese delito).

En el derecho comparado, arguyó, se advierte que la existencia del beneficio o interés por parte de la persona jurídica, para efectos de configurar su responsabilidad, no sólo es un problema de imputación sino que es de orientación en la gestión de riesgos. Pero, para que una persona jurídica gestione adecuadamente los riesgos debe hacer un levantamiento de ellos, e identificarlos, cuantificarlos y adoptar a su respecto medidas de control. La experiencia muestra que la vinculación con un beneficio o interés para la persona jurídica es un vector relevante para la gestión de riesgo, que hoy desaparece. A partir de la ausencia del beneficio, se hace más intensa la necesidad probatoria destinada a vincular la infracción de la persona jurídica con la comisión del delito. Actualmente, la existencia del beneficio o del interés para la persona jurídica deja en ésta el peso de acreditar el cumplimiento de sus deberes. Al retirarse tal vector, se produce el efecto contrario: el peso de la prueba recae en la persecución (se debe acreditar que la comisión del delito se ha producido por la falta de un modelo adecuado). Por lo mismo, la exigencia de beneficio o interés para la persona jurídica es relevante no sólo para la imputación, sino también para la gestión de riesgo de las propias compañías (hay relativa orfandad de ellas cuando se deben hacer cargo de cualquier riesgo vinculado a estos delitos, que pudiese generar un perjuicio a algún tercero).

En materia de agencia oficiosa, añadió, la actual redacción del proyecto de ley, cuando alude al sujeto que gestiona un asunto de la persona jurídica con o sin representación, puede acarrear efectos en el ámbito del agente oficioso. Sobre el particular, añadió, la norma podría recoger la idea de que, aun cuando no sea necesaria una representación de la persona jurídica (un mandato), si se trata de un sujeto que presta servicios debe referirse a aquellos relativos a la gestión de asuntos de la persona jurídica, de manera de excluir el caso del sujeto que actúa en un ámbito que no dice relación con los servicios que competen al agente oficioso. Cuando desaparece el beneficio o interés de la persona jurídica y se excluyen los casos en que ésta es la “víctima exclusiva”, se produce un vacío para la asignación de responsabilidad frente a “actos neutros”: se abre la puerta para la gestión de delitos que no producen perjuicio, y que no están vinculados al giro u operación propia de la compañía. De prosperar la tesis que hace responsable a la empresa en los casos en que no sea el perjudicado exclusivo, sería conveniente explicitar que el agente oficioso que actúa sin mandato no compromete la responsabilidad penal de la persona jurídica. Con todo, previno el profesional, es de alta intensidad la exigencia de que haya un perjuicio exclusivo para la persona jurídica. Cuando haya perjuicios para la propia corporación, aun cuando pueda haber perjuicios para terceros (que podrán ser objeto de responsabilidad civil), cabría eximir a la persona jurídica de su responsabilidad.

El proyecto, prosiguió el abogado, no aclara los efectos de una correcta y adecuada implementación de un modelo de prevención de delitos. Esta fue una norma que se eliminó en el primer trámite

constitucional. Con la actual redacción se produce un incremento relevante en el número de delitos que la persona jurídica deberá gestionar; sin embargo, se reduce la certeza que otorgaba la correcta gestión de un modelo de prevención (lo que torna difuso su efecto eximente). Con ocasión del debate parlamentario en la Cámara de Diputados sobre este particular, añadió, hubo académicos que advirtieron que, aun cuando se eliminara el efecto eximente, el resultado de un modelo de prevención de delitos adecuadamente implementado y diseñado sería igualmente eximente de responsabilidad (el artículo 3º del proyecto sigue exigiendo que la comisión del delito sea producto de la falta de un modelo adecuado de prevención). Así las cosas, si bien ésta es la interpretación correcta, parece conveniente contribuir a darle certeza explicitando ese efecto eximente (tal como lo consagra la ley vigente). La interpretación según la cual el artículo 3º sigue permitiendo que los modelos adecuadamente implementados eximan de responsabilidad a las personas jurídicas colisionaría con la historia fidedigna del establecimiento de las normas, pues los diputados no querían que eso ocurriera. De incrementarse el número de delitos que deberán gestionar las compañías para evitar su responsabilidad penal, sería aconsejable que no se disminuyan las certezas que les asisten, en orden a que cuando lleven a cabo correctamente un modelo de prevención de delitos, estarán exentas de responsabilidad penal.

Enseguida, el profesional sostuvo que, aunque la pena de supervisión que se establece para las personas jurídicas en el caso de que se declare su responsabilidad como medida cautelar o pena es una institución de mucho rendimiento, para que la medida sea correcta y no genere demasiadas externalidades requeriría una regulación complementaria. Esta es una inquietud sectorial del giro bancario, vinculada a sus dificultades, peculiaridades y especialización: el supervisor se plantea como una persona externa que no necesariamente conoce los riesgos específicos de la actividad correspondiente ni la forma como se administran estas entidades. El punto no se relaciona con su buena fe ni con su calidad personal o su ética, sino que con su especialización. Para supervisar se debe conocer el giro bancario, de suyo sofisticado, complejo y comprensivo de diversas áreas. Por esta razón, recomendó que el proyecto considere una regla que permita que el supervisor sea designado desde áreas específicas y que cuente con la experiencia necesaria. Un supervisor puede impactar muy fuertemente la operación corporativa. Además, adujo, se produce dilución de responsabilidades de los órganos de administración corporativos frente a una supervisión, toda vez que ya existe una persona designada por el tribunal para supervisar su operación.

Por lo demás, acotó, el proyecto no establece ninguna orientación acerca de cómo se debe llevar el trabajo del supervisor. En este ámbito existe interesante experiencia comparada en Estados Unidos, con la figura del “monitor de cumplimiento”, que es designado en conjunto por el persecutor penal y la respectiva organización. Con esta figura se

solucionan problemas de especialización, se puede concordar un “plan de cumplimiento” y se precave que las exigencias del supervisor dependan de su solo criterio, puesto que deben regirse por un instrumento de carácter público sancionado por sentencia judicial (el “plan de cumplimiento”). Como la persona jurídica participa en la generación del plan de cumplimiento y en el nombramiento del supervisor (o lo designa el tribunal), no hay dilución de responsabilidad.

En cuanto a la sanción penal por publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social que se refiera a productos o servicios financieros, señaló que actualmente hay una norma que se hace cargo de este aspecto como sanción de carácter administrativo por parte del SERNAC. Al respecto, la ABIF previene que se estaría criminalizando una conducta respecto de la cual no se conocen casos y con la que no han existido problemas en el marco del derecho administrativo. Si el derecho penal es la última razón del Estado y sólo donde han fallado otros mecanismos se justifica su incorporación, al no existir casos de esta índole no se podría afirmar que ha fallado la administración. No habría necesidad, entonces, de esta regulación. Es difícil justificar la tipificación como delito de algo que ni siquiera administrativamente ha sido desafiado.

Al finalizar, el profesional estuvo por establecer vacancia legal para la implementación del proyecto, de tal manera de que las personas jurídicas (en la especie, los bancos) dispongan de un plazo de dieciocho meses para realizar las adecuaciones requeridas para cumplir con el deber de gestión de riesgos que este proyecto impone.

El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuesto Internos (SII), refiriéndose a los alcances tributarios del proyecto, arguyó que la normativa propuesta construye un catálogo de delitos económicos mediante alusiones a disposiciones del Código Penal y de la legislación especial, diferenciando cuatro categorías. Es en la segunda categoría que se consulta en la que se incluyen delitos tributarios. Así, se considera económico el delito tributario cuando el hecho fuere perpetrado en el ejercicio de un cargo, función o posición, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Otro aspecto que incide en el ámbito tributario, remarcó, dice relación con que se permite al Ministerio Público seguir adelante con la persecución penal por delitos tributarios cuando en la investigación de delitos comunes se tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, que se especifican. La misma regla de continuidad se aplica cuando los hechos son cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o cuando le presta servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada

por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

En el ámbito de la investigación por delito tributario por parte del Ministerio Público, sin que exista la acción del SII (que conforme a la legislación actual es exclusiva y privativa del Director del SII), el proyecto establece que no se requerirá la presentación de denuncia o querrela por parte del SII en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, siempre que: a) la cuantía del impuesto exceda de 30 UTA (20 millones de pesos aproximados), y b) se afecte gravemente el patrimonio fiscal. La grave afectación del patrimonio fiscal se define por el proyecto, y ocurre: i) cuando los hechos punibles sean reiterados en más de un ejercicio comercial; ii) cuando exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos; iii) cuando se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla de continuidad de la investigación por parte del Ministerio Público, sin contar con querrela o denuncia del SII, ocurre con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en la empresa, o cuando dicha persona natural prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, y, como requisito copulativo, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

En cuanto a la continuidad del Ministerio Público con la investigación por delito tributario, arguyó, se le otorga al Ministerio Público la posibilidad de “forzar” la acción penal por parte del SII, facultad que se establece respecto de los delitos establecidos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario. En este caso, el Ministerio Público puede informar al SII que está investigando delitos comunes, pero se presentan indicios de la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 97 N° 4, y le solicita que se presente la acción penal por delito tributario. El SII tendrá el plazo de 90 días, contados desde la notificación del oficio del Ministerio Público, para ejercer la acción penal, que podrá prorrogarse por 45 días adicionales por resolución fundada. Si transcurriere el plazo sin que el SII hubiere emitido su decisión, o siendo ésta una decisión negativa, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, caso en el cual, de obtener una resolución positiva desde la Corte a su petición, el Ministerio Público podrá dar inicio a un proceso penal por delito tributario sin contar con la querrela o denuncia del SII. Por el contrario, si la Corte confirma la decisión del SII de no presentar denuncia o querrela por delito tributario sino que sólo perseguir la sanción pecuniaria, el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delito tributario, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los otros delitos

comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento.

El objetivo del proyecto al incluir a los delitos tributarios y, en particular, al abordar la facultad del SII de ejercer la acción por delito tributario en sede penal (iniciar una investigación penal por delito tributario u optar por la acción sancionatoria, persiguiendo exclusivamente la sanción pecuniaria o multa por el delito), se relaciona con la intención de abordar diferencias que se han suscitado entre el Ministerio Público y el SII respecto de la pertinencia del ejercicio de la acción penal por delito tributario. En opinión del SII, la solución más adecuada sería regular integralmente la materia, recogiendo la experiencia de más de veinte años de la reforma procesal penal, en un trabajo previo conjunto con los ministerios de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, el SII y el Ministerio Público. La idea es fortalecer la acción colaborativa y coordinada del Ministerio Público y el SII para lograr la más eficaz persecución y sanción de los delitos tributarios.

El proyecto de ley, a juicio del SII, muestra debilidades respecto de algunos delitos tributarios, que serán considerados como delitos económicos. Ello, dijo, genera una doble regulación: debe tratarse de delitos tributarios al ser perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico, o de otra naturaleza, para una empresa. No caben, por ende, todos los delitos tributarios. Lo mismo sucede con el forzamiento del proceso penal: se establece para el Ministerio Público la posibilidad de forzar el proceso penal tratándose exclusivamente de los delitos del artículo 97 N°4 del Código Tributario, pero no quedan incluidos otros delitos de similar o mayor gravedad (como los de omisión dolosa de la declaración del tributo del artículo 97 N° 5; los vinculados al comercio clandestino del artículo 97 N°s. 8 y 9 del Código Tributario; los de defraudación de zona franca del artículo 97 N° 25 del Código Tributario). De esta manera, el proyecto establece un estatuto jurídico híbrido para un mismo delito, al no fijar una naturaleza jurídica unívoca para el delito tributario (los que pueden ser para algunos tribunales calificados como delitos económicos, y para otros no). Lo anterior, hace más compleja su sanción. Además, crea un régimen penal distinto para los delitos tributarios sin atender a la gravedad de la conducta, sino por el hecho de estar tipificado como delito económico, vinculándolo con el accionar en forma de empresa. Existen conductas que afectan gravemente el orden público económico y que no necesariamente están asociadas al actuar empresarial, pero de las que el proyecto de ley no se ocupa (como la provisión de documentación falsa).

Otro problema que presenta la actual redacción del proyecto de ley, agregó, es que limita la opción del artículo 162 del Código Tributario para el Director del SII, de perseguir únicamente la aplicación de pena de multa por la comisión del delito tributario, en circunstancias que resulta razonable esta alternativa tratándose de casos de

menor entidad (particularmente cuando los montos son menores).

En lo que atañe al proceso que puede impetrar el Ministerio Público, afirmó que se obliga al SII a tomar la decisión de accionar sin tener la posibilidad de realizar todas las diligencias necesarias para definir si corresponde la presentación de una querrela o se persigue la acción de aplicación de la multa por el delito tributario. La recopilación de antecedentes constituye un proceso administrativo previo a la definición del Director de presentar querrela por delito tributario o perseguir exclusivamente la aplicación de la multa, y suele requerir tiempos superiores a los que impone el proyecto pues exige acopiar gran cantidad de información (declaraciones, cruce de información, revisión de la contabilidad de los contribuyentes, entre otros).

El personero del SII concluyó su intervención, reiterando que en los casos en que exista forzamiento del proceso por delito tributario el Ministerio Público deberá continuar la investigación penal sin la intervención del SII, no obstante que los delitos tributarios requieren una experticia técnica que se debiera manifestar en el proceso penal para un resultado exitoso.

El Honorable Senador señor Walker recordó que esta iniciativa de ley se compone de dos proyectos fusionados: uno, dice relación con un aspecto más sustantivo (que es el que ha generado más consenso); otro, con su ámbito procesal (de los Diputados señores Soto y Schilling). Los expositores han coincidido en que en el aspecto procesal es sano mantener el criterio de especialización y la titularidad de la acción del organismo competente en la investigación.

El **Director (S) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)**, en alusión a los puntos medulares del proyecto, explicó que, en circunstancias que entre los años 2020 y 2021 Chile fue evaluado internacionalmente en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en septiembre de 2021 se presentó el informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el que el país quedó en la categoría de “seguimiento intensificado”. Ello implica que cada seis meses se debe dar cuenta de las recomendaciones realizadas en dicha evaluación internacional, y demostrar que se cumplen las sugerencias y recomendaciones y se superan las falencias detectadas.

En ese marco, dijo, la UAF observa como positivas muchas de las modificaciones propuestas, porque permiten hacerse cargo de recomendaciones internacionales en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es el caso, precisó, del aumento de penas de determinados delitos base como los económicos; la inclusión del comiso de ganancias y del denominado comiso sin condena; el perfeccionamiento de la regulación sobre imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Con

todo, prosiguió, hay algunos puntos que merecen atención:

a) Tratándose de la identificación de los delitos económicos, en la cuarta categoría se incluye al delito de lavado cuando los bienes provengan de algunas de las categorías de delitos económicos identificadas. Existen 43 textos legales que se incorporan como delitos económicos, de los cuales sólo 8 están actualmente tipificados en el catálogo de delitos base del artículo 27. En consecuencia, no se podrá perseguir lavado respecto de todos los delitos económicos, sino que únicamente respecto de esos 8. En el caso más paradigmático según la evaluación internacional, y que fuera concebida como la principal crítica realizada a Chile en el catálogo de delitos base (para posteriormente investigar lavado), se comprenden los delitos medio ambientales. Cabría revisar, entonces, la posibilidad de incorporar los delitos medio ambientales al catálogo de delitos base de lavado en el artículo 27, con el objeto de que se pueda investigar dicho delito producto de lo generado en un delito medio ambiental. Además, atendido que sólo 8 de los delitos base que coinciden con los delitos económicos están tipificados, habría que evaluar la existencia de otras figuras penales en materia de delitos económicos que ameritaran estar contemplados en el catálogo.

b) En lo que concierne al comiso de ganancias, el informe de evaluación de GAFILAT recomienda continuar fortaleciendo la identificación, incautación y decomiso del producto del delito, especialmente en casos de lavado de dinero asociados a delitos determinantes de alto impacto, más allá del narcotráfico, la corrupción y el contrabando. En este ámbito, preocupa a la UAF que pueda existir un comiso de ganancias y un comiso sin condenas sólo para los casos de lavados provenientes de delitos económicos y no para todos los casos de lavado de dinero, cual es el estándar internacional. Se sugiere, por ende, que el comiso de ganancias se incluya respecto de todos los casos de lavado de dinero y no sólo de aquellos que provengan de delitos económicos. Sobre el comiso de ganancias, como una de las críticas del informe establece que *“se advierte un sistema normativo relativamente confuso en materia de gestión de bienes incautados y comisados, entre los cuales se encuentra también la falta de identificación clara de roles en todo el circuito”*, solicitó armonizar las normas aplicables al comiso de bienes cuando se realice una investigación en materia de lavado de dinero.

c) Acerca de la norma de proporcionalidad en materia de lavado (del inciso final del artículo 27), hizo presente que la evaluación internacional declaró que *“Una importante mayoría de las condenas por lavado de activos ha recibido penas inferiores a los 3 años de prisión. De este modo, se advierten limitaciones en la aplicación de penas suficientemente efectivas, proporcionales y disuasivas”*. Esta regla tiene una incidencia negativa en la eficacia, proporcionalidad y carácter disuasivo de las sanciones en los casos de delitos de corrupción pública, que prevén un

marco penal relativamente bajo. Al incorporarse la norma de proporcionalidad, sostuvo, se buscaba incorporar delitos económicos al catálogo de delitos base, que tenían penas relativamente bajas. Ahora, como se adecuan las penas de los delitos económicos y varias de ellas se aumentan, la propuesta sería analizar si se justifica aún esta norma de proporcionalidad. En el evento de que se considere justificada, cabría aclarar cómo será su aplicación: el proyecto de delitos económicos contempla primeramente reglas particulares de penas, para luego aplicar la norma de proporcionalidad.

En síntesis, propuso incorporar los delitos medioambientales como delito base de lavado de activos; incluir otros delitos económicos graves en el listado de delitos base (la ley N° 19.913 sólo establece una figura tributaria como delito base); no restringir la posibilidad de investigar lavado de activos respecto de determinados delitos económicos (por ejemplo, los de estafa, apropiación indebida y contrabando); que las normas de comiso de ganancias y comiso sin condena sean de carácter general para cualquier tipo de lavado o investigación en materia de lavado, y eliminar o reestructurar la denominada 'norma de proporcionalidad' en el delito de lavado de activos.

El Honorable Senador señor Walker, luego de hacer presente que en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que otorga mayores herramientas a la Fiscalía y a las policías para perseguir el narcotráfico y que establece la venta y enajenación temprana de todos los bienes muebles e inmuebles decomisados al narcotráfico, solicitó a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos darle suma urgencia.

El Honorable Senador señor De Urresti, junto con requerir más información sobre la incorporación de los delitos medio ambientales como delitos base de lavado de activos, sostuvo que, sin perjuicio de que distintos parlamentarios implementan una agenda destinada a la tipificación de delitos medio ambientales, el proyecto refunde e integra diversos aspectos vinculados al lavado de activos y al mercado financiero. La idea es sumar esfuerzos para hacer efectiva la persecución penal, y no sólo crear legislaciones particulares.

El Honorable Senador señor Walker comentó que, siendo clave la especialización en esta materia, se trata de un proyecto muy ambicioso, que involucra un esfuerzo relevante para enfrentar los delitos de "cuello y corbata".

La Honorable Senadora señora Ebensperger, dado el carácter técnico de la materia sobre que versa la iniciativa, abogó por concretar una regulación robusta y efectiva.

La Ministra de Justicia y Derechos Humanos

recordó que, si bien el proyecto se originó en moción, para el Gobierno es muy relevante y está en sintonía con su agenda antiabusos. En ese entendido, dijo, surge en un momento histórico en el que se verifica una sensación extendida de desigualdad en el tratamiento de los delitos, y una percepción de impunidad respecto de la persecución penal en materia de corrupción o delitos económicos. El proyecto, así, avanza en el sentido correcto y se hace cargo de sugerencias internacionales y de la demanda de la ciudadanía.

Enseguida, comprometió el interés del Ejecutivo de acompañar su tramitación e instalar una mesa técnica con los ministerios de Medio Ambiente y de Hacienda para coordinar servicios e instituciones con miras a plantear perfeccionamientos a la normativa que se consulta, recogiendo también las observaciones del SII y de la UAF.

- - -

VOTACIÓN IDEA DE LEGISLAR

A continuación, el **señor Presidente de la Comisión** declaró cerrada la discusión en general de la iniciativa y puso en votación la idea de legislar.

- Sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Ebensperger y Órdenes y señores Chahuán, De Urresti y Walker.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO Y PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

En mérito del acuerdo reseñado precedentemente, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar en general el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el que sigue:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Artículo 1.- Primera categoría. Para efectos de esta ley, serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1. Los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.

2. Los artículos 35, 43 y 58 del decreto ley N°3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.

3. El artículo 59 de la ley N°18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.

4. Los artículos 39 literal h); 39 bis, inciso sexto, y 62 del decreto ley N° 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

5. El inciso final del artículo 2 y los artículos 39, 141, 142, 154, 157, 158, 159 y 161 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda.

6. El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos de la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis, contenida en el artículo undécimo de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.

7. Los artículos 4 y 13 de la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros.

8. El artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

9. Los artículos 134 y 134 bis de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

10. Los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Artículo 2.- Segunda categoría. Serán, asimismo, considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1. El artículo 30 de la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

2. El inciso cuarto del artículo 8 ter y los artículos 97 y 100 del Código Tributario.

3. El inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

4. El inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda.

5. Los artículos 22 y 43 de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia.

6. El artículo 110 de la ley N° 18.092, que dicta Nuevas Normas sobre Letras de Cambio y Pagaré y deroga disposiciones del Código de Comercio.

7. El artículo 5 de la ley N° 20.009, que Establece un Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extravío, Hurto, Robo o Fraude.

8. Los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del decreto N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques.

9. Los artículos 49 y 50 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

10. Los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

11. Los artículos 29, 30 y 31 del artículo primero de la ley N° 19.473, que sustituye el texto de la ley N° 4.601, sobre caza.

12. Los artículos 11 y 12, inciso primero, de la ley N° 20.962, que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

13. Los artículos 38 y 38 bis de la ley N° 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, modifica las leyes 16.617 y 16.719; deroga el decreto ley N°651, de 17 de octubre de 1925.

14. Los artículos 73, 118 y 119 del Código de Minería.

15. El artículo 280 del Código de Aguas.

16. Los artículos 36 B y 37 de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

17. Los artículos 138 y 140 del decreto N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

18. Los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley N° 18.690, sobre Almacenes Generales de Depósito.

19. El artículo 44 de la ley N° 19.342, que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

20. Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática.

21. Los artículos 13 y 13 bis de la ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social.

22. Los artículos 19, 23 y 25, el inciso duodécimo del artículo 61 bis y el artículo 159 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones.

23. El inciso segundo del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.

24. El artículo 39 incorporado por el artículo 14 de la ley N° 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales

para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales.

25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

26. El artículo 44 de la ley N° 20.920, que Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje.

27. Los artículos 194, 196, 197, 198; el número 6 del artículo 240; el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469, 470; el número 2 del artículo 471; los artículos 472, 472 bis, 473; los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485, y el artículo 486 en tanto se refiera a las circunstancias expresadas en los números antes señalados del artículo 485, todos del Código Penal.

28. Los artículos 490 y 492 del Código Penal, en relación con el número 2 del artículo 391, y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399 del mismo Código, cuando el hecho se realizare con infracción de los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público.

Artículo 3.- Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1. El artículo 31 de la ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

2. El artículo 40 de la ley N° 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. El inciso primero del artículo 64-J de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y

sistematizado fue fijado por el decreto N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4. El artículo 48 ter de la ley N° 19.300, que aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

5. Los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237, 239; 240, número 1; 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246, 247; 247 bis, inciso primero; 248, 248 bis y 249 del Código Penal.

Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1. Considerados como delitos económicos conforme al artículo 1.

2. Considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3.

3. Constitutivos de alguno de los delitos señalados en los artículo 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.

Artículo 5.- Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2, 3 y 4 producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Artículo 6.- Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2 y 3 y a los números 2 y 3 de su artículo 4 que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme a la

disposición antes citada. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045.

Artículo 7.- Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Artículo 8.- Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1. Todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1 y al número 1 del artículo 4.

2. Las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2 y 3 y los números 2 y 3 del artículo 4, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Artículo 9.- Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Artículo 10.- Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa por imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa por aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalare una pena de multa superior al máximo por imponer conforme a esta ley, el tribunal se atenderá a lo que disponga dicha ley respecto a esa multa, en el margen que excediere al máximo antedicho.

Artículo 11.- Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de ésta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Artículo 12.- Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Artículo 13.- Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero.

b) El condenado, estando en una posición intermedia o superior, se limitó a omitir la realización de alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 unidades tributarias mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Artículo 14.- Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante.

b) El condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar sustancialmente la generación de daños.

c) El condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación.

d) El condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 unidades tributarias mensuales.

Artículo 15.- Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior. Este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416.

b) El condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho.

c) El condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 unidades tributarias mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Artículo 16.- Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, sólo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración.

b) El condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el hecho haya ocasionado perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 unidades tributarias mensuales, o haya reportado un beneficio de esta cuantía.

b) Cuando el hecho haya afectado el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo.

c) Cuando el hecho haya afectado abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Artículo 17.- Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimo. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, éste se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, éste se aplicará en su máximo. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, éste se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el tribunal deberá compensarlas en consideración a su número. En caso de que concurren en igual número, no producirán efecto de atenuar o agravar la pena.

Artículo 18.- Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Artículo 19.- Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley N° 18.216 sólo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

Artículo 20.- Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1. Remisión condicional.
2. Reclusión parcial en domicilio.
3. Reclusión parcial en establecimiento especial.

Artículo 21.- Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional sólo podrá decretarse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2. El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Artículo 22.- Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1. Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el tribunal. Éste podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile.

2. Sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que establece el reglamento de la ley N° 18.216. Dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuarios.

3. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Artículo 23.- Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1. La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas.

2. La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o de cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo amerite, se deberá imponer la pena de reclusión de fin de semana.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el tribunal establecerá como mecanismo de control de ella el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la ley N° 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Artículo 24.- Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio sólo podrá disponerse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada.

2. El penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superen dicho límite. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito. No obstante, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3. Existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justifiquen esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

Artículo 25.- Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

En aquellos casos en que la pena de reclusión parcial diurna ponga en riesgo la subsistencia económica del condenado, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o hijas o de cualquier otra persona que dependa económicamente del condenado o por otro motivo grave que así lo

amerte, se deberá imponer la pena de reclusión parcial nocturna o de fin de semana.

Artículo 26.- Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial sólo podrá decretarse si:

1. La pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

2. El penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. No se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena. No obstante, si dentro de los diez o cinco años anteriores a la comisión del nuevo crimen o simple delito, según corresponda, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

3. Existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Artículo 27.- Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

a 100 días-multa. Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51

101 a 150 días-multa. Presidio o reclusión menor en su grado máximo:

151 a 200 días-multa. Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo:

a 250 días-multa. Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley sólo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Dentro de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Artículo 28.- Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media unidad tributaria mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Artículo 29.- Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados

al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Artículo 30.- Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el tribunal deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Artículo 31.- Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo en el momento de la sentencia, sea o no sea de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Artículo 32.- Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Artículo 33.- Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes en el momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsual o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.

Artículo 34.- Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código Penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse a perpetuidad.

Artículo 35.- Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de la extensión de la inhabilitación el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Artículo 36.- Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Artículo 37.- Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitan presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Artículo 38.- Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual corresponda imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Artículo 39.- Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III COMISO DE GANANCIAS

Artículo 40.- Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Artículo 41.- Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponda a un delito económico aunque:

1. Se dicte sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero y al inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal.

2. Se dicte sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código.

3. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho.

4. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Artículo 42.- Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al juez competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Artículo 43.- Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del

Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al juez las medidas señaladas en el artículo 42.

Artículo 44.- Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Artículo 45.- Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Artículo 46.- Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que exista una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en el plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Artículo 47.- Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de treinta días, prorrogable a su solicitud por otros treinta días, hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción, no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo vence sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción, serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable, el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Artículo 48.- Modificaciones al Código Penal.
Modifícase el Código Penal de la siguiente forma:

1. Introdúcese en el artículo 20 el siguiente inciso segundo:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 24 bis:

“ART. 24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“ART. 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen.

2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés.

3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición.

4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”.

4. Sustitúyese el artículo 48 por el siguiente:

“ART. 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1. El comiso de las ganancias provenientes del delito.

2. Las multas.

3. Las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.

4. La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.

5. Las costas personales.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales

pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.

5. En su artículo 60:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisadas conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”.

b) Intercálase en su inciso sexto, entre las palabras “comisos” y “derivados”, la expresión “de instrumentos o efectos”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”.

6. En el artículo 240:

a) Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”.

b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”.

c) Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d) Introdúcese el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.”.

7. Introdúcese en el artículo 247 bis el siguiente inciso segundo:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare a su cliente, se impondrán además las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”.

8. Sustitúyese el artículo 284 por los siguientes artículos 284 y 284 bis:

“ART. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1. Bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o en un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio.

2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios.

3. Por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechara económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Sin perjuicio de las penas previstas en los dos incisos precedentes, cuando el delito se cometa con ocasión del ejercicio de una de las profesiones a que se refiere el N° 1 del inciso primero, se impondrá, además, la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que, habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de

dicha relación, se aprovechara en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

ART. 284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1. El ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción.

2. La captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieran una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa.

3. El acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa, vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”.

9. Sustitúyense los artículos 285 y 286 por los siguientes:

“ART. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.

ART. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”.

10. Sustitúyense en los artículos 287 bis y 287 ter las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11. Sustitúyese el Párrafo XIII del Título Sexto del Libro Segundo por el siguiente:

“§ XIII.

Atentados contra el medio ambiente

ART. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello o sin haber obtenido la debida autorización:

1. Vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales.

2. Extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas.

3. Vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo.

4. Extraiga componentes del suelo o subsuelo.

5. Libere sustancias contaminantes al aire.

La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetra el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental.

Lo dispuesto en el número 5 no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

ART. 305 bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene en el momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No vale como autorización, ni aun en el momento del hecho, la que hubiere sido obtenida mediante engaño, coacción o cohecho.

ART. 306. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1 a 5 del artículo 305, incurra en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor:

1. estuviere impedido de presentar un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en procedimiento sancionatorio administrativo relativo al hecho por haber sido sancionado anteriormente o por haber presentado anteriormente un programa de cumplimiento de la normativa ambiental en otro procedimiento; o

2. hubiere sido sancionado administrativamente por más de una infracción grave a la normativa ambiental cometidas dentro de los tres años anteriores al hecho en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad.

ART. 307. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extraiga infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Habiéndose establecido la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento.

2. En una zona que haya sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, haya sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, que se haya declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la haya declarado zona de escasez.

ART. 308. El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado:

1. Con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2. Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los demás casos.

ART. 309. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en el artículo anterior será sancionado:

1. Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, si la afectación grave fuere perpetrada vertiendo, liberando o extrayendo sustancias de la manera prevista en el artículo 305 o, en su caso, concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 306 o 307.

2. Con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados en los demás casos.

ART. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano o cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

La pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo si cualquiera de los hechos señalados en los incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos.

ART. 310 bis. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes

ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos, siempre que consista en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada.
2. Tener efectos prolongados en el tiempo.
3. Ser irreparable o difícilmente reparable.
4. Alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada.
5. Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable.
6. Poner en peligro la salud de una o más personas.
7. Afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicos del elemento o componente ambiental.

Tratándose de los hechos previstos en el inciso primero del artículo 308 y en los incisos primero y segundo del artículo 310, si la afectación grave causa un daño irreversible a un ecosistema, se impondrá el máximo de las penas a ellos señaladas.

ART. 310 ter. Además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa:

1. De ciento veinte a sesenta mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.
2. De veinticuatro mil a ciento veinte mil unidades tributarias mensuales, si la pena señalada fuere igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

El monto de la pena de multa pagada será abonado a la sanción de multa no constitutiva de pena que le fuere impuesta por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena por el mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta.

ART. 311. Tratándose de los hechos previstos en los artículos 305, 306 o 307 la pena sólo será la multa de ciento veinte a doce mil unidades tributarias mensuales cuando:

1. La cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no supere en forma significativa el límite permitido o autorizado, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso.

2. La infracción se prolongue sólo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por su vertimiento, liberación o extracción.

3. El infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido o autorizado y para evitar las consecuencias dañinas del hecho.

El tribunal podrá imponer una multa inferior a la señalada, desde una unidad tributaria mensual, cuando el hecho fuere perpetrado extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, se cumpliera la condición señalada en el número 1 y la extracción hubiere estado destinada a las bebidas y usos domésticos.

ART. 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar a áreas protegidas por el Estado. Esta prohibición impide al condenado ingresar a cualquiera de las áreas naturales mencionadas en dicho artículo que se encuentran bajo protección oficial.

También le impide acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

La prohibición será impuesta por igual a todas las personas responsables del delito consumado o frustrado, o de su tentativa.

ART. 311 ter. Fuera de los casos señalados en el artículo 310 el tribunal podrá apreciar la concurrencia de una atenuante muy calificada conforme al artículo 68 bis cuando el hechor repare el daño ambiental causado por el hecho.

ART. 311 quáter. Las penas previstas en las disposiciones de este párrafo para los atentados contra el medio ambiente perpetrados extrayendo aguas continentales, superficiales o subterráneas, serán impuestas sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan por el delito de usurpación.

ART. 311 quinquies. Cuando la persona obligada por las normas ambientales o el infractor a que se refieren las disposiciones

de este párrafo fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

ART. 312. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo el tribunal impusiere al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal.”.

12. Sustitúyese el artículo 438 por el siguiente:

“ART. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”.

13. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 459:

a) En el encabezamiento sustitúyese la expresión “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por “presidio menor en su grado medio a máximo”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las sanciones establecidas en este artículo no se aplicarán a quienes hagan uso del agua para consumo personal o familiar en los términos señalados en el artículo 56 del Código de Aguas.”.

14. Sustitúyese el artículo 463 por el siguiente:

“ART. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley N°20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”.

15. Sustitúyese el artículo 463 bis por el siguiente:

“ART. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1. Favorecer a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía, dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación.

2. Percibir, apropiarse o distraer bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación después de la resolución de liquidación.

3. Realizar actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o constituir prenda, hipoteca u otro gravamen sobre ellos, después de la resolución de liquidación.

4. Ocultar total o parcialmente sus bienes o sus haberes, dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución.”.

16. Sustitúyese el artículo 464 por el siguiente:

“ART. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”.

17. Derógase el artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”.

19. Sustitúyese el artículo 467 por el siguiente:

“ART. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en él, que lo induzca a ejecutar, omitir o tolerar una

acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1. Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta mil.

2. Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excede de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasa de cuatrocientas.

3. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excede de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta.

4. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excede de una unidad tributaria mensual y no pasa de cuatro.

Si el perjuicio excede de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.”.

20. En su artículo 468:

a) Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el delito previsto en el”.

b) Introdúcense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irroque perjuicio patrimonial a otra persona:

1. Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste.

2. Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habiliten el acceso u operación de un sistema informático, o

3. Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago.

Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago. La misma pena sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título.

En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 20.009.”.

21. Intercálase en el párrafo tercero del número 11 de su artículo 470, entre la palabra especial y la coma que le sigue, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad”.

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 472, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”.

23. Introdúcese a continuación del artículo 472 los siguientes artículos 472 bis y 472 ter:

“ART. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

ART. 472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que exceda de ochenta mil unidades tributarias mensuales o afecte a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”.

Artículo 49.- Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase en el artículo 157 el siguiente inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el juez podrá ordenar que se congelen las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. No se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 157 bis:

“Artículo 157 bis.- Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento veinte días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

3. Introdúcense en el artículo 259 las siguientes modificaciones:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que piensa valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”.

b) Introdúcese en el inciso final a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido la siguiente oración: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.

4. Introdúcese en el inciso tercero del artículo 348, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la

siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieren a un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.

5. Introdúcese el siguiente artículo 348 bis:

“Artículo 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, o si la aplicación del comiso afecta a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afecta personas que han sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afecta a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, 415 quinquies y 415 sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud. En el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los deberá identificar.”.

6. Introdúcese en el artículo 391 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”.

7. Introdúcese en el artículo 396 el siguiente inciso final, nuevo:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 unidades tributarias mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto es superior o si el comiso afecta a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

8. Introdúcese en el artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”.

9. Introdúcese en el artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 unidades tributarias mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto es superior o si el comiso afecta a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis:

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Artículo 415 bis.- Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivo no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Artículo 415 ter.- Citación. Habiéndose incautado bienes o habiéndolos asegurado conforme al artículo 157, para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, la que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Artículo 415 quáter.- Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud al menos cinco días antes de la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio

por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Artículo 415 quinquies.- Audiencia y prueba. La audiencia comenzará con la lectura de la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Artículo 415 sexies.- Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en ella. Sin embargo, si falta una prueba anunciada por las partes que el tribunal considere indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Artículo 415 septies.- Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes.

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos.

c) El análisis somero de la prueba producida.

d) Las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias.

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Artículo 415 octies.- Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”.

Artículo 415 nonies.- Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso, ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Artículo 469 bis.- Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.

Artículo 50.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 171.- La acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y la que tenga por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde

al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.

2. Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponda al delito.”.

Artículo 51.- Modificaciones a la ley N° 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica:

1. Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y su ejecución.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1. Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley.

2. El previsto en el artículo 8 de la ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resulte pertinente.

Para los efectos de esta ley no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”.

2. Sustitúyese su artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”.

3. Sustitúyese el artículo 3 por el siguiente:

“Artículo 3.- Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos, por parte de la persona jurídica.

Si concurrieren los requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetre exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”.

4. Sustitúyese el artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4.- Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1. Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva.

2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento.

Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas, deberán comunicarse a todos los trabajadores. La normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores,

empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos sus máximos ejecutivos.

3. Asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, con la adecuada independencia, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.”.

5. Sustitúyese el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que conste que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3.”.

6. Reemplázase el numeral 3) del artículo 6 por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

7. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1. La de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores a la perpetración del hecho.

2. Las que afecten a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando su perpetración o intervención bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”.

8. Sustitúyese el artículo 8 por el siguiente:

“Artículo 8.- Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1. La extinción de la persona jurídica.

2. La inhabilitación para contratar con el Estado.

3. La pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos.

4. La supervisión de la persona jurídica.

5. La multa.

6. La publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

9. Sustitúyese el artículo 9 por el siguiente:

“Artículo 9.- Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que pueda representar el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurre la circunstancia agravante establecida en el número 1 del artículo 7 o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pueda causar

graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o sea perjudicial para el Estado.”.

10. Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado sólo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurre la circunstancia agravante prevista en el número 1 del artículo 7 o en caso de reiteración delictiva.”.

11. Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de uno a cinco años.

Si la persona jurídica no recibe tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”.

12. Introdúcese el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si, debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resulta necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Además, tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica.

Para los efectos de sus deberes y responsabilidad, se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y sólo rendirá cuentas a éste de su cometido.”.

13. Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- Multa. A menos que la ley disponga una forma diversa de calcular la multa, ésta se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fije para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de Delitos Económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 unidades tributarias mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa y la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que imponga el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pueda imponerse a la persona jurídica porque fueron distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita en el momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que

dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que corresponda imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho dé lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”.

14. Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena, a costa de la persona jurídica condenada.”.

15. Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1. La extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9.

2. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a tres años.

3. La multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta tres años.

2. La multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos señalados en los artículos 11 bis y 10.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”.

16. Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente, podrá imponer cualquiera otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual atenderá a los siguientes factores:

1. La existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos y su mayor o menor grado de implementación.

2. El grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual.

3. Los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito.

4. El tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica.

5. La extensión del mal causado por el delito.

6. La gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pueda causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se trate de empresas que presten un servicio de utilidad pública.

7. Las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”.

17. Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, corresponda imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12.”.

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del artículo 16, el siguiente nuevo apartado:

“2 bis.- Ejecución de las penas”.

19. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1. Concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación.

2. Pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley.

3. Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de éste, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social, el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”.

20. Introdúcese el siguiente artículo 17 bis, nuevo:

“Artículo 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.”.

21. Introdúcese el siguiente artículo 17 ter, nuevo:

“Artículo 17 ter.- Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y municipalidades que la ley les encomienda administrar.”.

22. Introdúcese el siguiente artículo 17 quáter, nuevo:

“Artículo 17 quáter.- Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que imponga la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellas, de lo cual será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará a una audiencia especial, en la que deberán ser oídos todos los intervinientes.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”.

23. Introdúcese el siguiente artículo 17 quinquies:

“Artículo 17 quinquies.- Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código Penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pueda poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconseje el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro meses.”.

24. Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Si se impusiere la pena de comiso y éste recayere en una especie, se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero, se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente.

2. Si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente.

3. Si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa,

aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Sólo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor por pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”.

25. Introdúcese el siguiente artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis.- Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueron suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”.

26. Introdúcese el siguiente inciso segundo en el artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”.

27. Introdúcese, a continuación del artículo 19, el siguiente nuevo apartado:

“4.- Comiso”.

28. Introdúcese el siguiente artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis.- Comiso. Serán decomisados el producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando concurren los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Delitos Económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso, la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”.

29. Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público toma conocimiento de circunstancias que funden la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.

La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querrela. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como por cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afecten el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

30.- Introdúcese el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se

imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 quáter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se cumplan los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acredite que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código Procesal Penal.”.

31. Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre los números 4 y 5, el siguiente número 4 bis:

“4 bis) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 quáter.”.

Artículo 52.- Modificaciones a la ley N° 18.046. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas:

1. Sustitúyese el artículo 134 por el siguiente:

“Artículo 134.- Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaran dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.”.

2. Introdúcese en el Título XIV el siguiente artículo 134 bis:

“Artículo 134 bis.- Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”.

Artículo 53.- Modificaciones a la ley N° 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la ley N° 18.045, de Mercado de Valores:

1. Sustitúyense los artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Artículo 59.- Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no corresponda al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que haya intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo apto para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que, fuera de los casos previstos en las letras anteriores, proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la

referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona.

Artículo 60.- El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166.

2. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendar a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 61.- Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a) El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b) El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c) El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta haga oferta pública de valores o continúe intermediando valores en los términos del artículo 24.

Artículo 62.- Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a) El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b) El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o el que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c) El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d) El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”.

2. Deróganse los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3. En el artículo 165:

a) Elimínase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente,”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, deberá abstenerse de comunicar indebidamente dicha información a terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”.

c) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”.

4. Intercálase en el literal f) del inciso segundo del artículo 166 a continuación de la expresión “cónyuges” la frase “, convivientes civiles”.

Artículo 54.- Modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones:

1. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso decimonoveno, a continuación de la coma que sigue al guarismo “12”, la expresión “13, 13 bis,”.

b) Intercálase el siguiente inciso vigesimocuarto, nuevo, pasando los actuales incisos vigesimocuarto y vigesimoquinto a ser vigesimoquinto y vigesimosexto respectivamente:

“Con la misma pena establecida en el inciso anterior, se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.

2. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto en el artículo 103:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituyere también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045, o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

3. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 152 la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 159:

a) En su inciso primero:

i. Sustitúyese la expresión “medio” por “máximo”.

ii. Sustitúyese la coma que sigue a la palabra “liquidadores” por la conjunción “y”.

iii. Elimínase la coma que sigue a la palabra “dinero”.

iv. Elimínase la frase “y trabajadores”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren las letras a) o b) del inciso precedente constituye también delito conforme a lo dispuesto en los incisos primero o segundo del artículo 60 de la ley N° 18.045, o en el artículo 284 del Código Penal, las demás personas que lo perpetren responderán penalmente según lo dispuesto en dichos preceptos.”.

5. Introdúcese en el Título XIV el siguiente artículo 159 bis:

“Artículo 159 bis.- Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores u operadores de mesa de dinero de una Administradora de Fondos de Pensiones que, poseyendo información privilegiada de aquélla que trata el Título XXI de la ley N° 18.045 en razón de su cargo o posición, recomendaren a otro la realización de las operaciones a que se refiere la letra a) del inciso primero del artículo 159.

Las demás personas que perpetren el hecho previsto en el inciso precedente responderán penalmente según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la ley N° 18.045.”.

6. Intercálase en el artículo 168 el siguiente inciso décimo, nuevo:

“Si el hecho constitutivo de la infracción o contravención a que se refieren los incisos precedentes constituye también delito conforme al artículo 60 de la ley N° 18.045 o al artículo 284 del Código Penal, se estará a la pena señalada en esas disposiciones.”.

Artículo 55.- Modificaciones a la ley N° 20.712. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22 contenido en el artículo primero de la ley N° 20.712, que aprueba la ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1. Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) La infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la ley N° 18.045.”.

2. Introdúcese el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) originará las responsabilidades previstas en la ley N° 18.045.”.

Artículo 56.- Modificaciones a la Ley N° 17.322. Introdúcese el siguiente artículo 13 bis en la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Artículo 13 bis.- Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omite retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.”.

Artículo 57.- Modificaciones a la ley N° 19.496. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Derógase el artículo 17 L.

2. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación con cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1.500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el tribunal competente de acuerdo con la presente ley.”.

Artículo 58.- Incorpórase el siguiente artículo 37 bis en el artículo segundo de la ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Artículo 37 bis.- Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar conforme a las normas del presente Título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La misma pena establecida en el inciso anterior, recaerá sobre quién fraccione sus proyectos o actividades, con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Igual pena recaerá en el que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental.”.

Artículo 59.- Deróganse las letras a), b), c) d), e) y g) del inciso primero y suprímese el inciso segundo del artículo 7 de la ley N° 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 64 del decreto ley N° 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, por el siguiente:

“Artículo 64.- Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querrela formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

No obstante, la querrela será obligatoria para dicha institución, cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad.

Para los efectos del presente artículo se entiende que la colusión recae sobre bienes de primera necesidad cuando ésta ha producido alguno de los efectos consignados en el artículo 62 en el contexto de los mercados que inciden en la provisión de servicios educacionales; de prestaciones de salud; de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En estos casos, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar la querrela, a más tardar en el plazo de noventa días contados desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Presentada la querrela, la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en el acuerdo anticompetitivo, quedando en la esfera penal la determinación de la responsabilidad de las personas naturales que lo hubieren celebrado, ordenado celebrar o participado en su implementación o ejecución, en los términos definidos en el artículo 62.

En su querrela, la Fiscalía Nacional Económica informará la circunstancia de haber obtenido autorización judicial para realizar una o más de las medidas a que se refieren los numerales n.1) a n.4) de la letra n) del artículo 39, así como el hecho de haber realizado o no dichas diligencias. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para su utilización en el proceso penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, cumplen con lo dispuesto por el artículo 9 del Código Procesal Penal.”.

Artículo 61.- Intercálase en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis:

“Artículo 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querrela a que se refiere el inciso primero del artículo anterior no será necesaria en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio fiscal si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva

por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

El Servicio tendrá noventa días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso sexto del artículo anterior para interponer querrela o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez y hasta por cuarenta y cinco días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97 N°4.

Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos tributarios, sin perjuicio de proseguir con la indagación de otros delitos que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los incisos anteriores.”.

Artículo 62.- Introdúcese en el decreto con fuerza de ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, el siguiente artículo 189 bis:

“Artículo 189 bis.- El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tome conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que puedan relacionarse con los delitos a que se refiere el artículo anterior.

El Servicio tendrá noventa días corridos desde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querrela o denuncia, cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio podrá, por medio de resolución fundada, debidamente comunicada al Fiscal requirente, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trata, por una vez, y hasta por cuarenta y cinco días.

Transcurrido el plazo descrito en el inciso anterior sin que el Servicio hubiere emitido su decisión o siendo ésta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el Fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal. Para estos efectos, el Fiscal acompañará a su solicitud los antecedentes que fundan y justifican su pretensión de dar inicio al proceso penal.

La Corte requerirá informe al Servicio y, en lo sucesivo, el procedimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Revisados los antecedentes y habiendo constatado que existen motivos para sospechar que los hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio podrían importar la eventual comisión de alguno de los delitos que motivaron la presentación, la Corte autorizará la apertura del procedimiento penal, el que se tramitará en lo sucesivo conforme a las reglas del delito de acción penal pública.

En caso contrario, la Corte confirmará la decisión del Servicio y el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación por delitos de contrabando, sin perjuicio de proseguir con la indagación de los delitos comunes que se encuentren vinculados a las circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento reglado en los inicios anteriores.”.

TÍTULO FINAL

Artículo 63.- Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Artículo 64.- Prohibición de fraccionamiento. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá considerar todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

La pertinencia de las disposiciones de esta ley para el juzgamiento de los hechos perpetrados antes de su vigencia no requiere continuidad entre sus términos y los de las disposiciones antes vigentes, modificadas o derogadas por ella.

Las nuevas normas que la presente ley introduce en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 bis del Código Penal serán pertinentes para la determinación del comiso que antes de su entrada en vigor correspondía imponer como pena accesoria. El comiso de ganancias cuya ejecución se encuentre pendiente al momento de entrar en vigor la presente ley será ejecutado conforme a lo dispuesto por las nuevas normas que ésta introduce en el artículo 469 bis del Código Procesal Penal y en el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales. El comiso impuesto por sentencia condenatoria firme que se encuentre ejecutado al momento de entrar en vigor esta ley no se verá afectado por ello.

Artículo 65.- Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 63, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Si la presente ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas en los días y con la asistencia que se señala: 1 de diciembre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señor Pedro Araya Guerrero (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 15 de diciembre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pedro Araya Guerrero

(Presidente), Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 10 de mayo de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 18 de mayo de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Luz Ebensperger Orrego y Ximena Órdenes Neira (Pedro Araya Guerrero) y señores Francisco Chahuán Chahuán (Rodrigo Galilea Vial) y Alfonso De Urresti Longton.

Sala de la Comisión, a 24 de mayo de 2022.

Ignacio Vásquez Caces
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (Boletines N^{os}. 13.204-07 y 13.205-07, refundidos).

- I. **OBJETIVO DEL PROYECTO:** En síntesis, pretende sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.
 - II. **ACUERDO:** Aprobada idea de legislar por unanimidad (5x0).
 - III. **ESTRUCTURA DEL PROYECTO:** Consta de sesenta y cinco artículos, divididos en cinco Títulos.
 - IV. **NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** Los artículos 42; 47, inciso quinto; 49, N^{os}. 1 y 10 (en lo que se refiere a los artículos 415 ter y 415 octies); 50, N^{os}. 1 y 2; 51, N^{os}. 22 y 29; 61 y 62, son de rango orgánico constitucional, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, requieren para su aprobación del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio.
 - V. **URGENCIA:** Simple.
-
- VI. **ORIGEN E INICIATIVA:** En dos Mociones, ahora refundidas: la primera (signada Boletín N^o 13.204-07), de los ex Diputados señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda, y señores Ascencio, Desbordes, Schilling y Walker, y los Honorables Diputados señores Barrera, Celis y Soto Ferrada; la segunda (signada Boletín N^o 13.205-07), de los ex Diputados señoras Castillo y Núñez, y señores Cruz-Coke, Díaz, Fuenzalida, Schilling, Silber, Vidal y Walker, y el Honorable Diputado señor Soto Ferrada.
 - VII. **TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** Segundo.
 - VIII. **APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS:** Fue aprobado en general por 143 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
 - IX. **INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 20 de julio de 2021.
 - X. **TRÁMITE REGLAMENTARIO:** Primer informe. Pasa a la Sala.
 - XI. **LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**
 - 1) Constitución Política de la República.

- 2) Código Penal.
- 3) Código Procesal Penal.
- 4) Código Orgánico de Tribunales.
- 5) Código Tributario.
- 6) Código de Minería.
- 7) Código de Aguas.
- 8) Ley N° 18.045, de mercado de valores.
- 9) Ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
- 10) Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.
- 11) Ley N° 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales.
- 12) Ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.
- 13) Ley N° 20.345, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
- 14) Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
- 15) Ley N° 18.092, que dicta nuevas normas sobre letras de cambio y pagaré y deroga disposiciones del Código del Comercio.
- 16) Ley N° 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.
- 17) Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- 18) Ley N° 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje.
- 19) Ley N° 19.473, que sustituye el texto de la ley N° 4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.
- 20) Ley N° 20.962, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.
- 21) Ley N° 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales; modifica las leyes 16.617 y 16.719; deroga el decreto ley 651, de 17 de octubre de 1925.
- 22) Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.
- 23) Ley N° 18.168, general de telecomunicaciones.
- 24) Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
- 25) Ley N° 18.690, sobre almacenes generales de depósito.
- 26) Ley N° 19.342, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
- 27) Ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática.
- 28) Ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de seguridad social.
- 29) Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
- 30) Decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones.
- 31) Decreto ley N° 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.

- 32) Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973.
- 33) Decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley general de bancos y de otros cuerpos legales que indica.
- 34) Decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
- 35) Decreto con fuerza de ley N° 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio.
- 36) Decreto con fuerza de ley N° 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre ordenanza de aduanas.
- 37) Decreto con fuerza de ley N° 707, del Ministerio de Justicia, de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
- 38) Decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 2021, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
- 39) Decreto N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, que fija texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley 18.892, de 1989 y sus modificaciones, ley general de pesca y acuicultura.
- 40) Decreto N° 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992, que fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones.
- 41) Decreto N° 4.363, del Ministerio de Tierras y Colonización, de 1931, que aprueba texto definitivo de la ley de bosques.

Ignacio Vásquez Caces
Secretario

Valparaíso, 24 de mayo de 2022.

ÍNDICE

	Página
Objetivo del proyecto	2
Constancias	2
Normas de quórum especial	2
Consulta Excma. Corte Suprema.....	2
Asistencia	3
Antecedentes	4
I.- Antecedentes de hecho	4
Estructura del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.....	5
Aspectos centrales del debate	6
Discusión en general	7
Votación idea de legislar	38
Texto del proyecto	38
Proposición de la Comisión	38
Acordado	101
Resumen ejecutivo	103
Índice	106